

3

APENDICE

I

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Deróganse los decretos leyes y decretos 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 788/63, 1.607/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.214/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541/63, y los artículos 157 y 259 del Código Penal (ley 11.179).

Art. 2º — Pónense en vigencia las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63, menos los artículos 8º, 9º, 11, 12, letras a) b) y e) 15 y 17, segunda parte de la ley 13.985.

Art. 3º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título de los «Delitos contra el orden público», y bajo el epígrafe de «Otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo:

Artículo 213 bis. — Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, el que públicamente instigare o ejecutare actos que provoquen la lucha o segregación de sectores sociales, fundados en motivos religiosos o raciales.

Art. 4º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente:

Se aplicarán también a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.

Art. 5º — Incorpórase como artículo 222 del Código Penal (título IX, capítulo 2, del libro segundo), el siguiente:

Artículo 222. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación.

Art. 6º — Incorpórase al Código Penal el artículo siguiente:

Artículo 253 bis. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

Art. 7º — Incorpórase al Código Penal, como párrafo segundo del artículo 261, el siguiente:

Será reprimido con la misma pena el funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 8º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo IX bis, del título «Delitos contra la administración pública», bajo el epígrafe «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», los artículos siguientes:

Artículo 2681. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario o empleado público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

El que diere la dádiva o hiciere la promesa y la persona interpuesta para hacerla o recibirla, serán reprimidos con prisión de uno a tres años.

Artículo 2682. — Será reprimido con la pena del artículo 2681, párrafo 1º, el funcionario o empleado público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 2683. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario o empleado público que admitiere dádivas que le fueran entregadas en consideración a su función o empleo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Art. 9º — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172:

1. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descuberto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habersele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación.

2. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.

3. El que librare un cheque y diera contraorden para el pago fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo o frustrare maliciosamente su pago.

4. El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.

Art. 10. — Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal:

La del artículo 226, por prisión de dos a diez años.

La del artículo 229, por prisión de uno a seis años.

La del artículo 230, por prisión de uno a cuatro años.

La del artículo 256, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años.

La del artículo 258, párrafo 1º, primera parte, por prisión de uno a cuatro años, y reclusión o prisión de dos a seis años la de la segunda parte. La del párrafo segundo del mismo artículo, por la inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

La del artículo 265, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años.

La del artículo 266, por prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La del artículo 267, por las de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación hasta seis años.

Art. 11. — Sustitúyense las palabras «rebelión en el caso del artículo 226 del Código Penal, sedición en

el caso del artículo 229 del Código Penal, asociación ilícita o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63., del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y los tribunales de la Capital y los territorios nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63 por las siguientes:

o cualquiera de los comprendidos en el libro segundo, título VIII, capítulos 2, 3 y 5, título IX, título X, título XI, capítulo 6, 7, menos los casos de los artículos 260, 262 y 264, 8, 9 y 9 bis del Código Penal, o en la ley 13.985.

Art. 12. — En los procesos o penas que reconozcan su origen en el régimen de la ley 15.293, se aplicará la disposición contenida en el artículo 2º del Código Penal.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

II

INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SAGO

(Véase Diario de Sesiones del 2 de septiembre de 1964, página 3120)

Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el 20 de noviembre de 1963 la Declaración de las Naciones Unidas sobre la «eliminación de todas las formas de discriminación racial». Al tomar esta decisión reafirmó los principios incorporados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Teniendo en cuenta que «las discriminaciones por motivos de raza, color u origen étnico en algunas regiones del mundo siguen siendo causa de gran preocupación», afirmó la necesidad de eliminar rápidamente en todas sus formas dicha discriminación, en todas las partes del mundo, y de adoptar con tal objeto medidas de carácter nacional e internacional.

A continuación figura el texto completo de la declaración.

Texto de la resolución

La Asamblea General,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en el principio de la dignidad e igualdad de todos los seres humanos y tiene, entre otros propósitos fundamentales, el de realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama, además, que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, y que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación y contra toda provocación a tal discriminación,

Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, y que la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales proclama entre otras cosas la necesidad de poner fin al colonialismo rápida e incondicionalmente,

Considerando que toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en la práctica,

Teniendo en cuenta las demás resoluciones aprobadas por la Asamblea General y los instrumentos internacionales aprobados por los organismos especializados, en particular la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la esfera de la discriminación,

Teniendo en cuenta que, si bien gracias a la acción internacional y a los esfuerzos realizados en varios países ha sido posible lograr progresos en esta esfera, las discriminaciones por motivos de raza, color u origen étnico en algunas regiones del mundo siguen siendo causa de gran preocupación,

Alarmada por las manifestaciones de discriminación racial que aún existen en el mundo, algunas de las cuales son impuestas por determinados gobiernos mediante disposiciones legislativas, administrativas o de otra índole, en forma, entre otras, de *apartheid*, segregación o separación, así como por el fomento y difusión de doctrinas de superioridad racial y expansionismo en algunas regiones,

Convencida de que todas las formas de discriminación racial y, más aun, las políticas gubernamentales basadas en el prejuicio de la superioridad o en el odio racial, a más de constituir una violación de los derechos humanos fundamentales, tienden a poner en peligro las relaciones amistosas entre los pueblos, la cooperación entre las naciones y la paz y la seguridad internacionales,

Convencida asimismo de que la discriminación racial daña no sólo a quienes son objeto de ella, sino también a quienes la practican,

Convencida también de que la edificación de una sociedad universal libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales, que son factores de odio y división entre los hombres, es uno de los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas,

1. Afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente, en todas las partes del mundo, la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana;

2. Afirma solemnemente la necesidad de adoptar con tal objeto medidas de carácter nacional e internacional, incluidas medidas en las esferas de la enseñanza, la educación y la información, para asegurar el reconocimiento y la observancia universales y efectivos de los principios que se enuncian seguidamente;

3. Proclama la presente declaración:

Artículo 1

La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.

Artículo 2

1. Ningún Estado, institución, grupo o individuo establecerá discriminación alguna en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en el trato de las personas, grupos de personas o instituciones, por motivos de raza, color u origen étnico.

2. Ningún Estado fomentará, propugnará o apoyará, con medidas policíacas o de cualquier otra manera, ninguna discriminación fundada en la raza, el color o el origen étnico, practicada por cualquier grupo, institución o individuo.

3. Se adoptarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas para asegurar el adecuado desenvolvimiento o protección de las personas que pertenezcan a determinados grupos raciales con el fin de garantizar el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales.

Artículo 3

1. Se pondrá particular empeño en impedir las discriminaciones fundadas en motivos de raza, color u origen étnico, especialmente en materia de derechos civiles, acceso a la ciudadanía, educación, religión, empleo, ocupación y vivienda.

2. Toda persona tendrá acceso en condiciones de igualdad a todo lugar o servicio destinado al uso del público, sin distinción por motivos de raza, color u origen étnico.

Artículo 4

Todos los Estados deben adoptar medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales y otras políticas públicas a fin de abolir las leyes y los reglamentos que tengan como consecuencia crear la discriminación racial y perpetuarla allí donde todavía exista. Deben promulgar leyes encaminadas a prohibir esa discriminación y adoptar todas las medidas apropiadas para combatir aquellos prejuicios que dan lugar a la discriminación racial.

Artículo 5

Debe ponerse término sin demora a las políticas gubernamentales y otras políticas públicas de segregación racial y especialmente a la política de *apartheid* así como a todas las formas de discriminación y segregación raciales resultantes de esas políticas.

Artículo 6

No debe admitirse ninguna discriminación por motivos de raza, color u origen étnico en cuanto al disfrute por toda persona en su país de los derechos políticos y de ciudadanía, en particular del derecho de tomar parte en las elecciones por medio del sufragio universal e igual y de participar en el gobierno. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 7

1. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y a que se le haga justicia conforme a la ley y en condiciones de igualdad. Toda persona, sin distinción por motivos de raza, de color o de origen étnico, tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra su integridad personal cometido por funcionarios públicos, o por cualquier individuo, grupo o institución.

2. Toda persona tiene derecho a un recurso y amparo efectivos contra toda discriminación de que pueda ser víctima en sus derechos y libertades fundamentales por motivos de raza, de color o de origen étnico ante tribunales nacionales independientes y competentes para examinar esas cuestiones.

Artículo 8

Deben tomarse inmediatamente todas las medidas efectivas, en las esferas de la enseñanza, de la educación y de la información, para eliminar la discriminación y los prejuicios raciales y para fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los grupos raciales, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

Artículo 9

1. Toda clase de propaganda y organizaciones basadas en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinado color u origen étnico, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial en cualquier forma, serán severamente condenadas.

2. Toda incitación a la violencia, o actos de violencia, cometidos por individuos u organizaciones, contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, deben ser considerados como una ofensa contra la sociedad y punibles con arreglo a la ley.

3. Con el fin de realizar los propósitos y principios de la presente declaración, todos los Estados deben tomar medidas inmediatas y positivas, incluidas las legislativas y otras, para enjuiciar y, llegado el caso, para declarar ilegales las organizaciones que promuevan la discriminación racial o inciten a ella, que inciten al uso de la violencia o que usen de la violencia con propósitos de discriminación basados en raza, color u origen étnico.

Artículo 10

Las Naciones Unidas, los organismos especializados, los Estados y las organizaciones no gubernamentales tienen el deber de hacer cuanto les sea posible para fomentar una acción enérgica que, combinando medidas jurídicas y otras medidas de índole práctica, permita la abolición de todas las formas de discriminación racial. En particular, deben estudiar las causas de dicha discriminación a fin de recomendar medidas adecuadas y eficaces para combatirla y eliminarla.

Artículo 11

Todos los Estados deben fomentar el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y cumplir plena y fielmente las disposiciones de la presente declaración, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

2

INSERCIONES SOLICITADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO LEJARRAGA

(Véase Diario de Sesiones del 3 de septiembre de 1964, página 3285)

A

Buenos Aires, 1º de junio de 1963.

Expediente 154.035/63.

Visto los decretos leyes 4.214/63 y 4.200/63. y

CONSIDERANDO:

Que es fundamento imprescindible de la convivencia nacional el pleno ejercicio de las libertades de pensamiento y de expresión;

Que es necesario determinar con la mayor exactitud posible la interpretación de tales decretos leyes, su alcance en el ámbito de la actividad universitaria y en relación con los principios de la Constitución Nacional;

El Honorable Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires

RESUELVE:

Artículo 1º—Declarar que la Universidad de Buenos Aires rige su conducta de acuerdo con la base IV del Estatuto Universitario, que dice: «La Universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa, asegura dentro de su recinto la más amplia libertad de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente.»

Art. 2º—Encomendar al señor rector la constitución de una comisión, integrada por cinco miembros, para que analice los decretos leyes 4.214/63 y 4.200/63. Las conclusiones deberán ser comunicadas a este Consejo Superior mediante un informe escrito.

Art. 3º—Regístrese, hágase saber y pase a la Dirección de Despacho General e Informes.

Resolución Nº 211.

Julio H. G. Olivera. — Ludovico Ivanisovich Machado.

B

Expediente 154.035/63.

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, siendo las diecinueve horas, reunidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, los señores miembros de la comisión designada por el rectorado de la Universidad de Buenos Aires para examinar los decretos leyes números 4.214/63 y 4.200/63, profesores doctores Rafael Bielsa, Carlos Alberto Erro, José Antonio Gomariz, Alberto G. Padilla y Juan Silva Riestra, previas las deliberaciones que tuvieron lugar los días 25 de julio, 1º y 9 de agosto, 5 de septiembre, y en el día de la fecha, resuelve emitir por unanimidad el siguiente dictamen:

1º—El decreto ley 4.214, del 24 de mayo de 1963, destinado a «preservar el orden jurídico y las instituciones democráticas del país frente a la acción subversiva del comunismo», constituye un cuerpo de legislación de naturaleza penal, cuya sanción está atribuida por la Constitución, al Congreso (C. N., artículo 67, inciso 11). En consecuencia, corresponde dejar formulada inicialmente una reserva acerca de su validez, en razón de su origen, reserva que debe sentarse cualquiera sea la opinión que se mantenga respecto al carácter de jure o defacto del actual Poder Ejecutivo nacional.

2º—Sin perjuicio de la conclusión precedente, corresponde dejar establecido que es incuestionable la facultad de los poderes constitucionales de la Nación para dictar una legislación destinada a reprimir todo hecho o acto dirigido a destruir la Constitución y las instituciones creadas por ella. La Nación Argentina tiene contraídos por otra parte compromisos internacionales en tal sentido, existiendo ya en otros Estados del mundo occidental leyes de este tipo, protectoras de las instituciones democráticas, entendiéndose que aquéllas no afectan las libertades públicas.

3º—En virtud del principio de limitación de las facultades del Congreso por las normas de la Constituc-

ción Nacional, toda legislación de la naturaleza indicada deberá respetar las garantías consagradas en la ley fundamental y, específicamente en este caso, la garantía de la defensa en juicio que establece el artículo 18 de la misma, siendo esencial a este fin que en dicha legislación se parta de una definición clara y comprensible del acto inculcado.

4º — Frente a una legislación encuadrada en los límites constitucionales y destinada a asegurar la plena y permanente vigencia de las instituciones democráticas, su aplicación no puede ser eludida fundándose en la existencia de un régimen legal de autarquía o de autonomía que la misma legislación haya establecido para la universidad.

5º — El decreto ley 4.200, del 23 de mayo de 1963, reglamentario del derecho de salir del país que establece el artículo 23 de la Constitución Nacional, contempla situaciones que ya han perdido actualidad, por lo que estima innecesario pronunciamiento alguno a su respecto.

Con transcripción del precedente dictamen, elévese nota al señor rector.

Habiendo quedado cumplido el cometido de esta comisión, se levanta la reunión, siendo las veinte horas y treinta minutos, previa lectura y ratificación de la presente acta por los firmantes. — *Rafael Bielsa; Carlos Alberto Erro; José Antonio Gomariz; Alberto Gabriel Padilla; Juan Silva Riestra.*

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BRAVO (C. A.)

Comisión de Legislación Penal

Actas de las reuniones sobre proyecto de reformas al Código Penal realizadas el 17 y 24 de junio, y el 21 de julio de 1964

ACTA DE LA REUNIÓN DEL 17 DE JUNIO DE 1964

—En Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de junio de 1964, a la hora 11 y 25, con la presencia del profesor doctor Luis Jiménez de Asúa, se da comienzo a la reunión.

Sr. Presidente (Caro). — El profesor Jiménez de Asúa, con la gentileza que le es característica, ha concurrido, ante un nuevo requerimiento de la Comisión de Legislación Penal, a fin de exponer sus ideas acerca de la proyectada modificación del Código Penal y la consecuente derogación de la legislación represiva.

Queda en uso de la palabra el profesor Luis Jiménez de Asúa.

Sr. Jiménez de Asúa. — Si el señor presidente y los señores diputados me permiten, quisiera ser muy breve, porque todas mis intervenciones lo son, y hacer algunas consideraciones preliminares.

Quiero insistir en lo que ya dije a los señores diputados la última vez en que tuve el honor de estar con ellos. En toda ley, quírase o no, hay dos aspectos: el aspecto que podríamos llamar técnico, o de técnica legislativa, y el aspecto político. Desde que dejé mi país, y el 8 de agosto próximo se va a cumplir un cuarto de siglo, nunca jamás me he permitido hacer política, por razones obvias que están en la conciencia de todos los señores diputados.

Lo dicho no quiere decir que no soy un hombre político. Yo pienso seguir siéndolo, aunque radica sobre mi formación científico-jurídica. En cambio, en todas mis intervenciones en la República Argentina —y algunos señores diputados de las distintas provincias argentinas han oído mis conferencias— nunca jamás me he permitido veleidades políticas, y mucho menos lo haré ahora.

En primer término, diré que el proyecto no me es desconocido. El señor ministro Palmero me hizo la distinción de llamarme por expreso encargo del profesor Nuñez —que ha sido profesor en Córdoba y que resulta conocido para los señores diputados—, quien tenía un empeño muy grande en que yo conociera este problema.

Deseo que mi posición quede bien clara. Ordinariamente, para aquellos que no conocen bien la ley, existe una superstición en el sentido de que la ley, o en este caso el Código Penal, puede hacer

milagros. En los años 1958 al 60, cuando se agitó la reforma total del Código Penal, yo recibía muchas comunicaciones telefónicas, muchas cartas y muchos amigos que, creyendo que yo tenía intervención en esa reforma —no tenía ninguna— me pedían que se aumentara la pena de tal delito o tal otro. Si un amigo mío había tenido a la mujer al borde de la muerte por el descuido de un anestesiista en el hospital, quería que la muerte por imprudencia se castigara con la pena de muerte. Por otro lado, un señor a quien habían robado el automóvil deseaba que el robo de automotores tuviera como pena reclusión perpetua.

Esto evidenciaría que mucha gente cree que la pena es como una aspirina que lo remedia todo. Este es un error enorme, y sobremanera peligroso. Es necesario conocer profundamente las causas del peligro. Es verdad que la pena, cuando se aplica legalmente, tiene un enorme efecto de evitar el delito. Hay una prevención general que la ley ejerce, cuando está bien hecha —como dicen los psicoanalistas, cuando no es excesivamente benévola ni excesivamente vigorosa—; en este caso, tiene un efecto saludable. Pero, ¡cuidado!, que confiarlo todo a la pena es un error peligroso.

En efecto, atacar el delito, que es el síntoma, es como atacar el dolor de cabeza, que es el síntoma de alguna dolencia. Si llamamos al médico y le decimos que nos duele la cabeza, y aquél nos traduce al griego esa afección y nos dice que tenemos cefalea y nos da una aspirina para calmarla sin saber de dónde proviene —puede ser de una afección al hígado o al pulmón, o cualquier otra—, el dolor de cabeza pasará momentáneamente, y nos habituaremos al analgésico, sin haber combatido la causa.

Pero eso todavía es más grave cuando se trata de confiar a una ley penal los delitos de opinión, los delitos políticos. Al hombre que está guiado por un ideal político la pena no representa una valla, sino que puede representar un estímulo. Un escritor italiano ha dicho: «No importa la pena de muerte: mis hijos tienen muchas cabezas». Los hijos son las ideas; aunque le corten la cabeza, sus ideas quedarán. Y el famoso escritor austriaco Hans Krosbi dice que ese estímulo puede llegar, por una situación psicológicamente más o menos extraviada, a hacer que se cometan hechos castigados con la pena capital.

Por otro lado, nosotros pensamos esto: es preciso que la administración pública esté correctamente ejer-

cida. Es necesario castigar al funcionario que se enriquezca en forma indebida. Entonces pensamos que la ley, con sus normas sobre enriquecimiento ilícito, sería eficaz. Pero yo me pregunto: ¿no sería más práctico tener cuidado en el funcionario que se elige y dejarlo después en libertad? Esto nos da la idea de una gran burocracia, en la que un sistema debe ser vigilado por otro, y éste por un tercero, etcétera. De modo que yo no confío excesivamente en las figuras delictivas ni en la pena cuando se trata de delitos políticos y de esta clase de enriquecimiento. Los señores diputados lo están viendo mejor que yo, que hago una vida muy recoleta en mi casa, con mis libros. Si un hombre roba una cantidad pequeña, va a la cárcel; pero si ha robado mucho tiene un Cadillac, nos sentamos a su lado. La inmoralidad es mucho más profunda, y hay que buscarle otro remedio.

La gente está pensando que van a desaparecer los asaltos y los robos de automóviles, la enorme cantidad de delitos que el país tiene. Pero luego ve que, a pesar del aumento de las penas, los delitos siguen.

Hay que tener en cuenta la ley, muy mal hecha, por supuesto —y que me perdonen sus autores— del registro de automotores. Se han establecido aumentos en las penas por los delitos de robo y de hurto de automotores, lo que desde ya parece injusto, porque si a un señor que tiene un Cadillac se lo roban, quiere decir que ese señor lo mismo va a tener para la mujer y el hijo. Entonces se da una pena muy alta para este tipo de delitos, pero si a un hombre modesto le roban su mula o su arado, la pena es menor; y, ¿qué efecto tienen estas medidas, además de su injusticia? Los delitos se siguen cometiendo, y estamos viendo que todos los días hay robos de automotores. Claro está que confiar todo en el código o la ley penal trae consigo el descrédito cuando no surte los efectos que la gente espera de ellos.

Permítame que afirme que a mi juicio hay que poner mucho cuidado en la elección de la justicia penal, la reforma de la abogacía y la necesidad de que los mismos jueces como abogados se formen en una manera muy acabada en punto a la deontología, y cómo deben ser los regímenes penitenciarios. Todos ustedes conocen las cárceles de encausados que constituyen una vergüenza en la Argentina.

Desde los antiguos escritores de la Revolución Francesa hasta un español, Gutiérrez —y lo ha subrayado nada menos que las Naciones Unidas en su declaración de los derechos humanos—, vemos que el precepto es que a los encausados no se los puede considerar como culpables si hay una presunción de inocencia. Sólo es culpable quien ha sido declarado por el tribunal competente como tal.

Todos nosotros conocemos que a diario se pone a hombres en cárceles terribles, en donde la reclusión de jóvenes llega a ser un hecho cotidiano, y en las cuales se preparan los futuros delincuentes. Es necesario contemplar este aspecto de los regímenes penitenciarios; considero ciertamente que no va a haber una buena ley o un buen código si no se contempla ese otro aspecto esencial que acabo de mencionar.

Confiar todo a la ley penal es muy fácil y muy sencillo, pero hay que tener mucho cuidado en hacer eso. Es algo similar a lo que sucede con los políticos que consideran que con un buen discurso ya han hecho política. Un buen discurso es una gran pieza oratoria, lo mismo que si una ley está bien escrita puede ser un placer para el lector, pero ello no basta para la finalidad que se quiere llenar con la misma.

Disculparán los señores diputados estas consideraciones que he hecho que han resultado un poco lar-

gas; voy a tratar de contestar las preguntas que me han sido formuladas. Deseo aclarar que si algunos de los presentes desean formularme alguna pregunta adicional a las que figuran en el cuestionario que me fuera enviado, con todo gusto voy a responderles si se encuentra a mi alcance.

La primera pregunta que figura en este cuestionario dice así: «¿Considera conveniente la derogación de los decretos leyes penales?». Los llamados decretos leyes se designan en Alemania con la expresión «Ordenanza de necesidad», es decir, son legítimos cuando son necesarios. Es evidente que un Poder Ejecutivo que se encuentra en un momento dado con que el Congreso no funciona o está disuelto, y tiene necesidad de alguna ley, va a dar una ordenanza de necesidad, pero la condición que tiene que cumplir es que sea necesaria.

Sobre los decretos leyes hubo siempre una opinión que no se puede considerar mayoritaria sino que se puede decir que es *communis opinio auctoritatis* en el sentido de que los decretos leyes en materia penal son ilícitos. Desde mi punto de vista los decretos leyes penales no son legítimos y, por consiguiente, el derogarlos se hace urgente. Considero que el que debe derogarlos es el Parlamento, y si dentro de esos decretos leyes hubiera algo aprovechable, luego se lo podría convertir en ley. En el momento actual la derogación de los decretos leyes me parece no ya una disposición ejemplar sino de rigor científico.

Otra pregunta dice: «¿Debe tratarse en el mismo proyecto de ley la derogación de los decretos leyes penales y la modificación del Código Penal?». Este es un problema que yo llamaría de política legislativa. Desde luego que no están en el mismo plano de legitimidad los decretos leyes y las leyes. Efectivamente; se puede hacer primero la derogación de los decretos leyes y después el reemplazo de esos decretos leyes o de ciertas disposiciones de esos decretos por leyes auténticas. Pero —repite— éste es un proceso legislativo.

En la reunión anterior en que tuve el honor de estar con ustedes subrayé mucho la separación entre los problemas políticos —en los que deliberadamente no quiero entrar— y sobre los que esta comisión me solicita mi opinión. Con respecto a los decretos leyes, personalmente creo que vienen viciados de una ilegitimidad insanable y por tanto hay que derogarlos. Es posible que una nueva ley necesite una discusión más amplia y pueda requerir ser tratada aquí. Si el gobierno y el Parlamento creen necesario tratar en el mismo proyecto la derogación de esos proyectos y después el reemplazo de ciertas disposiciones en forma legal, yo no veo ningún inconveniente en ello, pero deseo aclarar que con respecto a este punto no voy a entrar al fondo del asunto.

La tercera pregunta del cuestionario dice: «¿Es conveniente crear la figura delictiva descrita en el artículo 4º del proyecto, especialmente el artículo 213 bis, incisos 1º y 2º?».

Antes de responder a esta pregunta deseo hacer algunas observaciones que me parecen muy importantes. En el momento de hacer la derogación de los decretos leyes considero que no debe quedar ninguna duda sobre cuáles son los que se derogan. Del examen que he realizado, veo al comienzo de este proyecto dos decretos leyes que no están incluidos para ser derogados. Existen otros decretos más a este respecto, y una serie de decretos que podríamos llamar accesorios y reglamentarios que por lógica técnica legislativa caen al caer el decreto principal, pero que

sería conveniente, para que no hubiera ninguna duda, que fueran expresados de una manera taxativa en el sentido que quedan derogados.

Vale decir: creo que los señores diputados deben estudiar exhaustivamente este aspecto de la derogación de los decretos leyes, aunque reconozco que el mismo es muy difícil, porque hay una enorme cantidad de decretos leyes llamados represivos, pero es preciso hacerlo.

Uno de mis discípulos ya ha realizado este trabajo, y creo que tiene una nota de los decretos que no figuran expresamente en el artículo 1º del proyecto para ser derogados... En este proyecto se habla en el artículo 1º de lo siguiente: «Deróganse los decretos leyes...». Es decir, considero que habría que comprobar si todos los decretos están enunciados en ese artículo, o por el contrario, faltan algunos. Estimo que todos los decretos deben ser derogados si tienen carácter represivo o penal.

La pregunta referida al artículo 4º del proyecto dice así: «¿Es conveniente crear las figuras delictivas descritas en el artículo 4º del proyecto, en especial el artículo 213 bis, incisos 1º y 2º?».

Hay en el Código Penal una disposición según la cual son delitos ciertas asociaciones. Son las llamadas asociaciones de malhechores. Sin duda alguna se ha creído que el artículo 210 del código no era suficiente, y se propone castigar a «los que participaren en asociaciones permanentes que tuvieran por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación». Habla de la sola participación, de pertenecer a esa asociación. Hay que meditar mucho sobre esto, y hacerlo a fondo.

Una asociación que se crea para ejercer violencia es una asociación delictiva. ¿Cabría en el artículo 210? Lo probable es que sí. ¿Es preciso subrayarlo más? La técnica legislativa dice que tal vez no; la política puede decir que sí. En esta segunda parte ya he dicho que no voy a entrar.

En cambio permítaseme que subraye el inciso 2º, que se refiere a «los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases». Quiero insistir en esto, que ya lo dije cuando el doctor Palmero me hizo el honor de consultarme, por encargo del propio doctor Illia, sobre esa disposición: ¿podemos decir que es igual la lucha de clases que la discriminación racial o religiosa? Evidentemente, no.

En la lucha de clases, si bien la aspiración es la de que desaparezcan las clases, mientras se lucha no se discrimina. No pretende el obrero borrar al patrono, como el que lucha por una discriminación religiosa o racial. «Los negros no deben entrar en la universidad», se dice, por ejemplo, en el Sur de los Estados Unidos. Eso sí es discriminación. Lo mismo puede acontecer en el ámbito religioso. En mi país, por ejemplo, no hay derecho a demostración religiosa alguna que no sea la católica. Hay allí discriminación religiosa. Pero el obrero no dice «no necesito patronos», porque los necesita.

¿De dónde viene la lucha de clases? La lucha de clases viene desde Engels. Cuando los marxistas toman sus métodos, y hay una afirmación, una negación y una síntesis. En un principio la máquina era pequeña y se trabajaba en la casa, luego se fue perfeccionando y pasó a la fábrica. La explotación de mujeres y niños en aquella época fue terrible, ya que tenían 14, 15 ó 16 horas de trabajo. El pretender que esa jornada fuera de 11 horas provocó una lucha

de clases; hay a propósito una película italiana, *Los compañeros*, que muestra el problema. Entonces, la lucha de clases ¿cómo era? Primero está lo que llamáramos la tesis, siguiendo la palabra, que es mi hambre, mi desamparo. Luego hubo una antítesis: el miedo a ser despedido. Claro que hoy en día Willy Brandt dice que la lucha de clases en Alemania Occidental es innecesaria porque se ha creado una clase nueva, de obreros especializados, pero esa clase no existe en todos los países.

Entonces, en un país donde esa clase no existe, y voy a hablar del mío para no citar a la Argentina, el que hace una propaganda de la lucha de clases estaría incurso en una pena muy grave. Es indudable que la ciencia del socialismo, en su origen, ha sido la lucha de clases.

Entonces, quedaría totalmente suprimido el socialismo con este inciso. Entonces, ni Palacios, ni Ghioldi, ni ningún otro socialista podría ir mañana a la tribuna y proclamar la lucha de clases.

Este es un problema bastante grave. ¿De dónde proviene este inciso? Este inciso viene del artículo 36 del decreto ley 782, pero éste se agrava en la fórmula del proyecto. En el proyecto se dice lo siguiente: «Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases». El artículo 36 del decreto 782 agregaba algo más: «de un modo peligroso para la tranquilidad». Esto ha sido borrado. Aunque no sea de un modo peligroso para la tranquilidad, un simple discurso que incite a la lucha de clases quedaría incurso en este artículo.

La siguiente pregunta dice: «¿Son convenientes las modificaciones a las escalas penales propuestas en los artículos 7º y 12?».

Esto, efectivamente, se debe a la creencia de que la agravación de la pena puede acabar con los delitos. Pero debemos fijarnos bien en la significación que tienen los delitos a los cuales se refiere la agravación de la pena.

El artículo 226 se refiere a rebelión; el 229, a sedición; el 230 trata del mismo tema. Es decir, se refiere a los delitos que llamamos políticos no sólo subjetivamente, sino también objetivamente.

Ya he manifestado anteriormente que considero que la agravación de las penas no es eficaz para lograr éxito contra los delitos políticos. Lo mismo estimo que sucede con el artículo 1º de este proyecto.

Voy a referirme a los aspectos a los que se refiere el último párrafo del artículo 219 del Código Penal: «Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación». El párrafo que dice: «Comete también delito y será castigado con prisión de 6 meses a un año...», fue incorporado al código en virtud del artículo 3º de la ley 13.569. En la parte de este proyecto que se refiere a las disposiciones que han de ser derogadas, ha sido obviado este artículo de la mencionada ley. Creo recordar —los señores diputados podrán comprobarlo con posterioridad por si mi memoria resulta flaca— que el propio Núñez en su mensaje propugna la derogación de este inciso, porque es también delito de opinión. Dice el artículo 219 del Código Penal: «Comete también delito y será castigado con prisión de 6 meses a un año: a) El que publique o difunda por cualquier medio manifestaciones que pongan en peligro la neutralidad de la Nación frente a otras potencias en conflicto bélico o las relaciones amistosas con países extranjeros; b) El que publique o difunda por cualquier motivo doctrinas o manifestaciones encaminadas a sustituir la soberanía nacional por otra extranjera, a derrocar el gobierno o a destruir o reemplazar la li-

bertad establecida en la Constitución por un régimen de fuerza. Este es un artículo ocasional para el caso de guerra. Esos artículos ocasionales considero que no deberían injertarse porque pueden dar pie a muchas irregularidades. Creo que el propio Núñez establece en su mensaje la necesidad de derogar este último párrafo del artículo 219 del Código Penal que fuera incorporado por el artículo 3º de la ley 13.569.

La quinta pregunta del cuestionario dice: «¿Qué opinión le merece el artículo 13 del proyecto?». El artículo 13 de este proyecto se refiere al ya famoso artículo 302 del Código Penal. Es un artículo que nace con la finalidad de terminar con los cheques sin provisión de fondos.

Se trata de que el cheque pueda ser usado, como se lo hace en muchos otros países, lo mismo que un billete de banco; es decir, que tenga la dignidad que se requiere de ese documento para las transacciones comerciales. Los señores diputados saben perfectamente que en nuestra República hay muchos comercios y un número considerable de empresas que dicen: «No se reciben cheques.»

A este respecto han hecho una serie de reformas. Primeramente se estableció ese artículo y se hizo una serie de interpretaciones sobre lo que debe ser considerado como protestos. Hubo varios fallos plenarios para fijar si debía entenderse la palabra «protesto» en el sentido del Código de Comercio. Luego viene el proyecto del año 1960, en el que se amplía la protección a otros actos que no sean únicamente al que nos referíamos antes, es decir, al cheque sin provisión de fondos.

Finalmente, nos encontramos con la reforma que introduce el decreto 4.778, mediante el cual se convierte en ley la reforma que se propugnaba a través del proyecto del año 1960. Por último, tenemos la modificación que se propone en este artículo 13, el cual tiende más a proteger al cheque mismo que al cheque sin provisión de fondos.

Ahora bien, el que paga en un plazo determinado un cheque queda librado de él. Sin embargo, sólo en determinados casos puede existir ese puente de plata; en otros no.

Me preocupa mucho la modificación que se propone en el artículo 14 del proyecto, que se refiere a la sexta pregunta del cuestionario, que dice: «¿Debe aceptarse la reforma propuesta en el artículo 14 del proyecto?». Aquí se vuelve a insistir en que no hay que excarcelar. Hay que tener cuidado con ello porque las penas que establecen los códigos la gente las conoce; por otro lado, no hay que olvidar qué buscamos con la pena, que es una llamada prevención general. Es decir, la pena puede tener una eficacia de prevención general por el hecho de estar en el código y de saber todos que esa pena se ejecuta. Además, hay una llamada prevención especial, que es la que se hace sobre las personas ya condenadas. Esto nos viene de Alemania y los penalistas de todas partes lo manejamos extensamente. Así decía Becarria hace muchos años: tienen que estar perfectamente determinadas esas penas.

Ahora bien: a un determinado hombre se lo excarcela o se lo condena.

La excarcelación no es otra cosa que una facultad del Poder Judicial. La excarcelación no es un derecho del reo, ni la no excarcelación representa una pena. Por eso insisto, lo mismo cuando hablamos de ley de monopolios, en que no debemos en modo alguno considerar a la no excarcelación como una pena indirecta. Por eso debe exigirse al juez gran prudencia; en mi país el fiscal general de la República tiene

derecho de hacer circulares dirigidas a los jueces que entienden en un delito determinado que, por sus características, exige que se tenga mucho cuidado. Por eso se puede obligar o, si es debido, ordenar a los jueces que para dar la condena condicional o la excarcelación hagan previamente un pronóstico del sujeto. Debe considerarse si es necesario que el individuo esté en la cárcel o si hay seguridad de que se escape dejándolo en libertad. Pero el hecho de aumentar en ciertos delitos la pena mediante la no excarcelación, me parece tal vez inadecuado.

Sr. Presidente (Caro).— Señor profesor Jiménez de Asúa: hay una pregunta adicional con respecto a esta disposición.

Sr. Jiménez de Asúa.— ¿Sobre el artículo 268 del Código Penal?

Sr. Presidente (Caro).— Sobre la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo a ese artículo.

Sr. Jiménez de Asúa.— No había entrado en este tipo de delitos, porque no había preguntas referidas al enriquecimiento ilícito.

El artículo quedaría totalmente modificado, y tendría en cuenta los delitos de sospecha, como diría Mancini. Todos estos artículos, como los señores diputados saben, tienen una forma orgánica, porque provienen casi textualmente del proyecto de 1960.

Yo no he tenido nunca cargos públicos en el Poder Ejecutivo de mi país, si bien fui diputado presidente de las Cortes en mi país no había más que una Cámara, porque no había Senado; los cargos que desempeñé fueron por elección popular. Nosotros teníamos en España —desgraciadamente el régimen actual todo lo ha podido— una gran austeridad política. Voy a citar el caso de Sánchez Guerra, cuyo hijo ha muerto hace poco después de haberse recluido en un convento, que había sido ministro un número grande de veces, y también presidente del consejo de ministros, y cuando falleció no dejó a sus hijas nada más que el honor de haber sido ministro.

En consecuencia, todos estos métodos contra los políticos impuros francamente no me parecen mal. Desgraciadamente, en muchos países de Hispanoamérica se considera que la política lleva de raíz el enriquecimiento y, efectivamente, éste es un modo de ser y de pensar. El artículo, a pesar de tratarse de delito de sospecha —lo que es algo muy grave—, no me parece del todo mal, porque el hecho de que la política sirva de enriquecimiento me parece mucho más grave que matar, tal vez porque a los republicanos españoles la política nos ha servido de radical empobrecimiento.

Sr. Lastiri.— Desearía hacerle una pregunta de tipo personal, porque tengo una duda.

Si una persona compra una mercadería con un cheque adulterado, comete, evidentemente, el delito de defraudación. Pero, ¿habría concurso ideal entre la falsificación del cheque y la estafa, o la falsificación se considera como el medio que hace posible la estafa?

Sr. Jiménez de Asúa.— El Código Penal, en su artículo 302, lo dice en forma bastante clara: «Será reprimido con prisión de uno a seis meses el que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero y siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172...». Es decir, que si el código establece, como en este caso, la subsidiariedad de este artículo, no se aplicará el concurso ideal.

Sr. Presidente (Caro).— Ubicado el asunto en el plano de técnica legislativa y no de política legislativa, quisiera preguntarle si el proyecto está bien así, con una primera parte que deroga los decretos re-

presivos y una segunda parte que modifica el Código Penal.

Sr. Jiménez de Asúa. — Señor presidente: creo haber tocado un poco este tema al comienzo de esta reunión. Si nosotros pensamos que la derogación de los decretos leyes responde a que el Parlamento cree que esos decretos leyes fueron dictados sin necesidad —empleo *ex profeso* estas palabras de rigurosa técnica—, si no que constituyen lo que llamamos antes una «ordenanza de necesidad», está bien que sean derogados. Por otra parte, hay un principio que dice: *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, es decir, no hay delito sin una ley anterior que lo establezca, tienen que ser derogados. En cambio, la creación de nuevas normas legales por el Parlamento es una cosa diferente, y estas dos cosas es necesario separarlas en lo posible.

No creo que haya dificultades en que artículos de distintos tipos se encuentren en el mismo proyecto. El Parlamento puede separarlos en uso de su autoridad superior a la del Poder Ejecutivo para dictar leyes, pero separarlo como está, en artículos, teniendo mucho cuidado en establecer de una manera expresa cuáles son aquellos decretos leyes que renacen. Quizás esto no lo he dicho antes con la suficiente claridad, pero no sólo es preciso consignar qué decretos se abrogan sino también cuáles de los que renacen van a ser efectivamente aplicados o cuáles de los que renacen van a ser abrogados. Es conveniente que se aclare bien ese aspecto para que mañana no surjan dudas. Hay que tener en cuenta que la ley penal no sólo se dirige al juez sino también al pueblo. Hay que establecer claramente cuáles son los decretos que se derogan y si no se derogan, todos hay que decir cuáles son los que se abrogan —yo no dejaría ninguno— y después cuáles son las disposiciones que al renacer van a quedar abrogadas por considerarse delitos de opinión, que no son necesarios, como ese artículo dictado para la ocasional época de guerra. De tal modo que aunque se encuentren en el mismo proyecto de ley deber quedar perfectamente delimitados.

Sr. Presidente (Caro). — Deseo formular una pregunta complementaria de la primera: en la hipótesis de que se resolviera la derogación de los decretos leyes represivos y se dejara para otra oportunidad la reforma al Código Penal, ¿usted considera que los bienes jurídicos que se pretenden tutelar están bien asegurados en el Código Penal actual?

Sr. Jiménez de Asúa. — No olvidemos que la mayor parte de estas disposiciones tiene alcance político.

Sr. Presidente (Caro). — ¿Y en el plano jurídico?

Sr. Jiménez de Asúa. — Creo haber manifestado al principio la idea de que la garantía de la vida civil, política y física de los habitantes de la República Argentina no sólo se lleva a cabo con el escueto precepto legal. Hay que tener en cuenta que por una parte hay una vigilancia policial que creo haber manifestado ya el otro día que es deficientísima. Ha declarado uno de los jefes de Policía que hay hoy en Buenos Aires menos policías que los que había en el año 1923. Además de ello, hay que tener en cuenta el aumento de la población con el consiguiente aumento de la delincuencia, que trae aparejada siempre toda situación de progreso cultural, industrial, fabril, obrero, etcétera.

Recuerdo haber dicho —no sé si en forma semipública, cuando estábamos el viernes próximo pasado en este mismo recinto— que los muy frecuentes robos o hurtos de automotores se podrían evitar con una más

eficiente vigilancia policial, sin necesidad de establecer en un artículo una pena más grave. Considero que en este aspecto mucho más efectivo que la agravación de la pena es una estricta vigilancia. Con una mejor situación social y una más eficiente vigilancia, quedarían perfectamente garantizadas esas situaciones.

Personalmente conceptúo que muchas de las disposiciones del Código Penal vigente son eficaces; lo único que hace falta es que se cumplan, que se detenga al culpable, que la prisión sea capaz de corregirlos sin necesidad de aumentar las penas.

No creo que pueda obstar lo que estoy manifestando en el sentido de que en el mismo proyecto se haga la derogación y se establezcan las disposiciones que se llaman sustitutivas. Alguien se preguntaba hace muchos años cómo podría reemplazarse la pena de muerte. Considero que es igual que muchos años atrás preguntarse cómo podía ser reemplazada la esclavitud.

Sin embargo, hoy no tenemos esclavitud. Entonces, podríamos preguntarnos ahora cómo reemplazar algunos decretos leyes. Yo ya he fijado mi punto de vista personal, y el Parlamento tiene en la opinión pública una serie de diferentes pareceres de orden político que hay que contemplar. Yo no pretendo nunca estar en lo cierto. Me eduqué en una institución de enseñanza libre donde se utiliza el sistema llamado de la duda metódica, basado en el sistema hegeliano en el cual a la tesis sigue la antítesis, para llegar finalmente a la síntesis.

Sr. Presidente (Caro). — ¿Usted es partidario de la no sanción del artículo 213 bis, donde está incluida la cuestión de la lucha de clases?

Sr. Jiménez de Asúa. — Lo único que he atacado de una manera un tanto excesiva —si ustedes quieren— desde el punto de vista oratorio ha sido la cuestión de la lucha de clases.

Sr. Presidente (Caro). — ¿Y la discriminación religiosa?

Sr. Jiménez de Asúa. — Lo dejaría. Me parece que la libertad de cultos y de razas es esencial.

Sr. Presidente (Caro). — ¿La misma libertad no plantea una lucha?

Sr. Jiménez de Asúa. — Lo de lucha está colocado por la lucha de clases.

Sr. Presidente (Caro). — El artículo 213 bis que se propone en el artículo 3º del proyecto dice así: «Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años...

2º) Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases. Es decir, que el concepto de lucha está involucrado en los tres aspectos, a saber: racial, religioso o de clases.

Sr. Jiménez de Asúa. — Entonces, bastará con poner solamente la palabra «discriminación».

Sr. Avila. — Para el supuesto caso que no se tuviera el artículo 213 bis, el artículo 210 de nuestro código ¿contemplaría, por ejemplo, el caso reciente de la aparición de guerrilleros?

Sr. Jiménez de Asúa. — Creo que sí, porque no debemos olvidar que las violencias son delitos, y el artículo 210 del código dice: «Será reprimido con reclusión o prisión de un mes a cinco años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación». Naturalmente que el que se propone lograr de un modo violento que no haya más que una religión, que no haya más que una idea política, etcétera, está proponiendo una serie de actos delictivos. De manera que con una interpretación correcta, no puedo dudar

de que los magistrados la han de hacer, estarían incluidos en ese artículo.

Sr. Avila.—Se me planteaba la duda por el hecho de que la justicia de Tucumán está excarcelando a los guerrilleros.

Sr. Jiménez de Asúa.—La excarcelación es un problema completamente diferente.

Sr. Avila.—Ya eso depende del Código de Procedimientos.

Sr. Jiménez de Asúa.—No sólo del Código de Procedimientos, sino también de lo que el señor juez crea. Nadie lo obliga al juez a ponerlo en libertad.

Creo que, efectivamente, quienes propugnan la violencia para lograr un fin están realizando un delito, y en este caso constituyen no ya una asociación ilícita, sino una banda. Hay que tener cuidado de no confundir estos dos conceptos, sobre los que hay una serie de interpretaciones jurisprudenciales.

El que pertenece a una asociación ilícita y comete un robo podrá estar cometiendo dos delitos en concurso real. Es éste un problema muy interesante, que está siendo tratado por la Cámara, y sobre el cual no hay unanimidad.

Sr. Presidente (Caro).—Muchísimas gracias, señor profesor Jiménez de Asúa, por su valiosa colaboración.

Sr. Jiménez de Asúa.—Soy yo quien debe agradecer a los señores diputados la distinción de que me han hecho objeto.

—Se da por terminada la reunión a la hora 12 y 30.

ACTA DE LA REUNION DEL 24 DE JULIO DE 1964

—En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de junio de 1964, a la hora 12 y 50:

Sr. Presidente (Caro).—Declaro abierta la reunión. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Bravo.

Sr. Bravo (C. A.).—Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo quiero manifestar que estamos dispuestos a apoyar la derogación de los decretos leyes de carácter represivo.

Sr. Soler.—Considero que la derogación de los decretos leyes deben ser lisa y llana, ya que ésa es la única salida para evitar los problemas que se están planteando ante los estrados judiciales que están declarando su invalidez.

Sr. Presidente (Caro).—Doctor Soler, ¿usted cree convenientes para el país estos decretos que tienden, en gran parte, a la represión de actividades de tipo ideológico?

Sr. Soler.—El problema principal de estos decretos no es ése. Tengo «partie pris» pues soy autor de un proyecto completo de Código Penal y no me gusta que al código vigente se lo despedace y se le infieran los remiendos que se le han inferido. ¿Sabe, por ejemplo, la comisión, que actualmente no es delito el envenenamiento de aguas y productos medicinales?

Un buen día, sin decirle nada a nadie, apareció un decreto en el Boletín Oficial que derogaba 25 artículos del Código Penal, y entre ellos el artículo 200 que dice: «Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables

o substancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

«Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.»

Esto no es delito en virtud de la reforma introducida por el decreto 788, según la cual los delitos de los capítulos 4º y 5º solamente son punibles cuando sean cometidos para impedir o perturbar la seguridad o la defensa nacional. El caso es del farmacéutico que vende una receta falsificada por cobrar mil pesos por lo que vale doscientos, y sin embargo, eso no es delito hoy en la República Argentina. Todo este ordenamiento legal está concebido dentro del sistema que viene creciendo en la República desde el año 1945, y que consiste en la tendencia a transformar todos los delitos en sabotaje, como si no estuvieran para proteger a las personas o los bienes de las personas como tales.

Así es como un simple decreto del Ejecutivo deroga los artículos 200, 201 y 214 del Código Penal vigente, y los reemplaza por otras normas que dicen más o menos lo mismo, pero que sólo son delitos cuando se viola la soberanía nacional. Con esa inteligencia están hechas casi todas las reformas.

Me apena un poco, lo confieso, la superficialidad con que ha sido tocado el Código Penal. Yo he tratado artículo por artículo con mucha paciencia y con mucho respeto porque este código lejos de ser una cosa mala es una cosa muy bien hecha, y lo digo yo que he hecho un proyecto para sustituirlo. El código vigente proviene de la mejor opinión científica europea y occidental. Es hijo del Código Penal Italiano de 1890. Este código de Italia, obra de las escuelas toscana y napolitana, que representan la síntesis del derecho penal histórico de dos mil años. De manera que entrar en este código con tanta falta de respeto es técnicamente deplorable.

Se ha creado una situación de la cual no hay salida, salvo la derogación expresa de esos decretos. En caso de volver a insistirse sobre ellos, siempre los jueces podrían —como hoy lo hacen— declarar su inconstitucionalidad. Hay un principio constitucional que los invalida.

Estos decretos no son otra cosa que expresiones de la tendencia legislativa que considero funesta y que viene directamente del nacionalsocialismo. Esto se nos ha pegado, y se nos ha pegado tanto que ni se advierte, por ejemplo, que se deroga el delito de envenenamiento de aguas y medicamentos, cuando se lo hace punible sólo si tiene por objeto destruir la soberanía nacional.

Sr. Bravo (C. A.).—El mensaje coincide con su pensamiento. Deroga los decretos y da vigencia nuevamente a las normas legales que habían sido modificadas. A su vez, en el aspecto de los cheques sin fondo...

Sr. Soler.—La única reforma urgentísima que debe hacerse es en materia de cheques. El decreto 4.778 toma en realidad el texto de mi proyecto. Lo demás contenido en el proyecto, no es nada urgente.

Que debe encararse la reforma de la legislación penal, como autor de un proyecto de Código Penal, digo que sí, pero se trata de una tarea delicada y no de tomar el código a hachazos. La reforma penal tiene que venir, me atrevería a decir que tiene que continuar. Mi proyecto se debatió durante dos años, se examinó, se corrigió artículo por artículo; debe estar en la tercera o cuarta etapa. No hay razones

de urgencia, por ejemplo, para incorporar al Código Penal los delitos electorales.

¿Quieren que mencione algo de real urgencia? El delito de estelionato, delito que es uno de los más graves de hoy en la Capital, toda ella vendida en propiedad horizontal por documentos privados. No es delito otorgar después una hipoteca por escritura pública. Esto sí es un delito grave. Uno de los decretos lo toma de mi proyecto fragmentariamente.

En esto soy conservador, y mi conservadorismo consiste en tomar los textos de las leyes con temor reverencial; por ejemplo en el hurto, antes de cambiar la palabra «apoderamiento», por la de «sustracción», me tiembla la pluma, porque muchos años de experiencia y de cultura jurídica están detrás de aquella palabra.

En una reforma parcial procesal se dice que no es excarcelable el reo cuando el hecho cometido corresponda a una «delincuencia asociada organizada»; pero esta extraña figura no está en el código. Cuando se ha corregido el Código de Procedimientos de la Capital, se ha introducido una reforma penal que sólo va a afectar a la Capital Federal.

Sr. Presidente (Caro).— Usted conoce el proyecto que ha sido elaborado y cuyos tres primeros artículos hacen estrictamente a esta materia. Los dos primeros derogan varios decretos y por el artículo 3º se declaran vigentes otros.

Sr. Soler.— Mi problema de urgencia termina con el artículo 3º.

Sr. Presidente (Caro).— Hay muchos criterios en esta materia. Hay quienes creen que tiene que salir un solo despacho; quienes sostienen que deben salir dos despachos independientes. Lo que urge es la derogación de estas normas y referir los demás problemas a la reforma integral del Código Penal.

Sr. Soler.— Les ruego, sobre todo, que atiendan a un problema de seguridad jurídica. No se sabe si los decretos están vigentes o no. Hay cámaras federales que dicen que son inconstitucionales, magistrados que forman parte de otras cámaras donde no se ha discutido la inconstitucionalidad que también sostienen la inconstitucionalidad. Hoy mismo se ha dictado una sentencia declarando la invalidez de dichos decretos. No es posible que con respecto a esta materia haya ese tipo de discrepancia. La única salida es derogarlas, aunque no es la salida legítima ciento por ciento. Se derogan porque son inconstitucionales, y si son inconstitucionales no se puede decir que valen. El Congreso se encuentra en una situación coacta. No puede decir que sí, solamente puede decir que no.

Considero las cuestiones penales como una cosa aparte, y creo que hay razones para hacerlo. La ley penal, como las demás, debe ser hecha por el Congreso, de acuerdo con la atribución del inciso II del artículo 6º de la Constitución Nacional de dictar los códigos de fondo. Pero además no debemos olvidar el artículo 18 de la Carta Fundamental, que duplica la prohibición precisamente con respecto a la ley penal.

Sr. Presidente (Caro).— Otra de las preguntas está vinculada a la redacción del artículo 213 bis del proyecto, que dice: «Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años: 1º) Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieron por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación; 2º) Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases, y 3º) Los que, pública o privadamente, instigaren a los militares o a los

componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado.»

Quisiéramos conocer un análisis somero de estas disposiciones.

Sr. Soler.— Este artículo es, desde luego, muy delicado y tiene el peligro de llevar las cosas más allá de lo debido en una legislación permanente. Técnica-mente, a mi juicio, es grave. Dice que se va a penar a los que pertenezcan a una asociación que no esté contemplada en el artículo 210 no obstante el hecho de que la asociación tendrá por objeto cometer violencias contra las personas. Esto es sin duda una asociación ilícita del artículo 210.

Sr. Presidente (Caro).— Contra las personas o contra las cosas.

Sr. Soler.— Son delitos de daño.

Sr. Bravo (C. A.).— El artículo 210 es más amplio.

Sr. Presidente (Caro).— Esto estaría subsumido en el artículo 210 y crearía el conflicto de dos normas para delitos similares.

Sr. Soler.— El otro inciso está vinculado con el problema de las luchas raciales y religiosas, y a mi juicio no da la solución correcta.

Esto está vinculado con el delito de genocidio. El delito de genocidio es un delito mal nacido, porque ha nacido en el campo del derecho internacional. En este campo hay mucha gente vanidosa y superficial, y se ha utilizado el genocidio como arma política contra el sistema hitleriano, sobre todo. Pero el propósito político de este delito —que era el de combatir a Hitler— se transformó en fallas técnicas monumentales al construir dicha figura. Se ha olvidado que todo delito debe estar concebido sobre la idea de la tipificación. Ya no se dice como hace 50 años: no hay delito sin ley previa; sino que además se dice que esa ley tiene que ser tipificante.

Esta figura tenía evidentes propósitos políticos que comparto porque era y soy antihitlerista. Pero se ha inflado tanto el delito de genocidio que ya nadie sabe lo que es. En definitiva es fácil saber qué delito se cometía cuando se metía a una persona en un horno un homicidio. Si metíamos a dos personas, eran dos homicidios y si pusieramos a 10 mil serían otros tantos homicidios, ya fuere por odios racial o religioso. El genocidio no es otra cosa que un homicidio o lesiones graves en el cuerpo o en la salud agravado por motivos políticos o religiosos.

Es por falta de tipificación del genocidio que se ha llegado a hablar de «genocidio cultural». ¿Qué es el delito de genocidio cultural? ¿La quema de un libro? Veamos, primero, si es delito la quema de un libro ajeno. El delito de genocidio tiene el peligro de llegar a ser una violación abierta del principio de la tipicidad, sobre el que descansa desde hace cincuenta años el derecho penal moderno.

En consecuencia, el sistema propiciado por mi proyecto —en el cual me ratifico— es el de que las figuras tradicionales que pueden ser sometidas por odio racial o religioso reciben, por esa vía, una agravación.

Sr. Presidente (Caro).— ¿Y con respecto al problema de las luchas de clases o religiosas?

Sr. Soler.— El problema de la lucha de clases, el racial o el religioso está metido dentro de la teoría del genocidio. «Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases.» El problema consiste en mirar la lucha de clases racial o religiosa desde el punto de vista de las figuras comunes.

Sr. Presidente (Caro).—¿Cuáles son las razones?

Sr. Soler.—Son las siguientes: es muy difícil hacer un tipo claro de esa infracción. Ese es el problema que se ha planteado en los límites a los cuales se puede llevar la legislación penal en materia de defensa de la democracia. Creo que ésta debe ser defendida cuando se presenten situaciones de ataque contra ella.

Sr. Presidente (Caro).—Agresiones ideológicas y de hecho. Tenemos que partir de la idea de que necesitamos actos externos. El problema que plantean ciertas agresiones en la democracia es el de saber cuáles actos externos vamos a considerar

Sr. Soler.—Lo que pasa con la legislación penal es que con cierta frecuencia se echa mano de ella para hacer cosas que deberían hacerse por otra vía. Es el caso típico de las leyes de monopolio. Se lo fomenta por un lado y se lo castiga por otro.

En Norteamérica, donde existe el problema de comunismo, la ley que lo combate es fundamentalmente de carácter administrativo. Ellos respetan la libertad de que un sujeto sea comunista y aun que lo diga; puede despachar correspondencia, pero esa correspondencia debe llevar un sello que dice: «correspondencia comunista». La violación de esos deberes de certificar la correspondencia es una infracción penal, pero es la consecuencia de haberse infringido un procedimiento de carácter administrativo. Tomar las cosas de otra manera, sobre la base de la pura legislación penal, es un poco tomar el rábano por las hojas. Se toman las hojas, al tirar, se cortan, y el rábano queda abajo.

Sr. Presidente (Caro).—Sobre este despacho hay una inmensa mayoría de opiniones sobre el problema de la lucha de clases, con respecto a su eliminación.

Sr. Soler.—Si hay mayoría dispuesta a eliminar la lucha de clases, del artículo no puede quedar el resto.

Sr. Presidente (Caro).—La redacción es defectuosa, ya que habla de los que públicamente instiguen. Se incrimina la instigación a la discriminación, y no a la discriminación en sí misma.

Sr. Soler.—Así es, señor diputado.

Sr. Bravo (C.A.).—Poniendo un ejemplo: el que hace propaganda pública de instigación queda incurso en el delito; pero supongamos que el día de mañana un gobierno efectuara discriminaciones, ese gobierno o, mejor dicho, los integrantes de ese gobierno, no quedan incurso en ese delito. Me parece que es a eso a lo que usted quiere llegar.

Sr. Soler.—Así es, señor diputado. No quedarían dentro.

Sr. Presidente (Caro).—Sería también instigación—esto es sólo por vía de ejemplo— el sermón del sacerdote que fustigara a los mahometanos, o a los miembros de cualquier otra religión. Entiendo que hay que castigar a los que perturban las ceremonias religiosas, destruyen las sinagogas, etcétera.

Sr. Soler.—Entiendo que son inseparables el problema de la vigencia de los decretos leyes y la legislación penal; urgente, urgente no es la reforma del Código Penal. Prefiero que no se le ponga otro parche más...

Sr. Bravo (C.A.).—Hay gente que opina que si se deroga la legislación represiva va a ser necesario sancionar algún otro tipo de normas, porque no es posible dejar al Estado inerte frente a algunos ataques disolventes.

Sr. Soler.—Eso es lo que me gustaría escuchar.

Vuelvo a repetir que esto es la consecuencia de pensar que sin muchas figuras de sabotaje, espionaje

y traición la ley penal no sirve. Este código vigente contiene todas las figuras que razonablemente debe contener. Algunos parecen creer que sin esos decretos el hecho de socavar las vías de un ferrocarril no es delito. Esto es un grave error. Para serlo, no es necesario llamar a esas acciones espionaje, traición o sabotaje, trayendo esa concepción de la legislación hitlerista o musoliniana, que para nosotros comenzó con el decreto 536/45, y que no ha hecho sino engrosar en el decreto 788, que no es otra cosa que el 536 multiplicado por diez. La idea ha ido creciendo en la República Argentina, como si los bienes jurídicos de las personas merecieran protección solamente cuando el ataque contra ellas nace como consecuencia de un acto de sabotaje.

Esa es la idea que está en el fondo. Diríamos así, por ejemplo, que el homicidio debe ser castigado, porque disminuye la capacidad de defensa nacional al haber un ciudadano menos. Esto no es muy exagerado si se piensa que se deroga el artículo 200, haciendo que el envenenamiento de los medicamentos y de agua potable sólo sea punible cuando con ello se atenta contra la soberanía nacional. Esa idea, que yo creo muy poderosa y muy vigente, es una de las razones por las cuales se ha criticado tanto al Código Penal en la República Argentina. Se lo ha modificado con suma frecuencia, para peor, porque incluso la reforma que se ha hecho al 212 es mala.

El Código Penal argentino es un instrumento civilizado. Es mucho mejor que el Código Penal alemán y que todos los sudamericanos. Es uno de los mejores códigos del mundo. Mejor, inclusive, que el español. Es aun superior al italiano. De manera que entrar a hacer enmiendas precipitadas al Código Penal es una falta de respeto.

Tomemos como ejemplo el decreto ley 788/63 en lo que respecta al sabotaje. Con respecto a los primeros incisos del artículo 12 diremos que son delitos de tipo intencional y calificado que están reprimidos por el Código Penal. ¿Es concebible que a quien suscitare alarma colectiva, tumulto, desorden, se lo condene con 15 años de prisión? ¿No les parece mucho, señores diputados? Las figuras del Código Penal vigente son mucho más comprensivas y menos detallistas; diríamos mucho más elásticas y proporcionadas a la importancia del bien jurídico violado.

Sr. Cheble.—Con ese pensamiento, se sancionó la ley de abastecimiento. Se estableció el delito económico, que contempla el artículo 300 del Código Penal; o sea que, en una palabra, se cercenó al Código, enervándolo con una ley como la de abastecimiento.

Sr. Soler.—Al Código Penal no se le puede pedir que cree prosperidad. No se lo ha hecho para eso.

Sr. Presidente (Caro).—Doctor Soler: ¿qué me dice con respecto al artículo 268?

Sr. Soler.—Les pido, señores diputados, que no me soliciten opinión concreta con respecto a cada uno de los artículos, porque no quiero dar una opinión superficial sobre el problema. Mantengo mi posición de que si me dijeran cuáles son las cosas urgentes que hay que sancionar yo les diría que son una o dos.

No estoy de acuerdo con el proyecto del doctor Palmero, salvo en la parte en que se derogan los decretos leyes, pero no para emparchar al código. Con esto no quiero decir que mi proyecto sea mejor.

Sr. Presidente (Caro).—En el artículo relativo a los cheques sin fondo...

Sr. Soler.—Lo que yo haría en caso de ser legislador, es derogar todas las reformas y sancionar el texto del artículo referente a los cheques sin

fondo, así se evitaría la cuestión de saber si la ley tiene o no carácter retroactivo, y desde cuándo rige. Los jueces, hasta el día de hoy, pueden libremente declarar la inconstitucionalidad de dicho decreto, en la parte pertinente. Para que esto tenga vigencia, hay que sancionar una ley. En caso de que lo hagan, les rogaría que corrijan el plazo de gracia, que en mi proyecto original estaba mal expresado y que la comisión también copió mal. Donde dice «las 24 horas subsiguientes», debe decir «siguientes».

Sr. Bravo (C. A.). — La única finalidad que tiene este artículo es permitir que el librador de un cheque sin fondos puede dar marcha atrás; por eso se le dan veinticuatro horas.

Sr. Soler. — Las veinticuatro horas subsiguientes son dos días, cuarenta y ocho horas en total.

Sr. Bravo (C. A.). — Tiene un día para arreglar su situación.

Sr. Presidente (Caro). — Doctor Soler: quiero agradecerle su presencia en esta comisión y las declaraciones que ha hecho, que contribuirán, en gran medida, a nuestro trabajo.

Sr. Soler. — Le agradezco, señor diputado, sus conceptos elogiosos.

En mi concepto, la reforma penal es importante; hay muchos planteos en mi proyecto que me parecen necesarios. Uno de ellos es, por ejemplo, el problema de la reincidencia simple y múltiple, para que no produzca la situación de impunidad que se presenta en algunos casos. El sujeto que comete un delito por vez primera tiene la pena fijada por el código; pero al reincidente se le aumenta la pena en un tercio al segundo delito que cometa, y a partir de la tercera reincidencia la escala penal se duplica. Un sujeto cometerá un hurto y se aplicará la pena de cuatro años fijada en mi proyecto; al segundo hurto que cometa, la pena será de seis años, y así sucesivamente, o sea que en la comisión del tercer hurto la pena será de diez años.

No se va a plantear la situación actual de que el sujeto entra y vuelve a salir. Se acabó el salir.

No veo tampoco la urgencia que se presenta en introducir artículos sobre delitos electorales. El fraude electoral ha pasado un poco a la historia. Inclusive se han olvidado otras cosas que son más importantes que los delitos electorales, tales como los de robo con violencia en las personas, que es mucho más grave que en el caso de que lo sea con violencia en las cosas; el robo con medios mecánicos y también el de los automóviles. Son supuestos que el código vigente no contempla. No olvidemos tampoco el delito de estelionato.

Sr. Bravo (C. A.). — Algo similar ocurrió en Quilmes o Avellaneda, donde se hicieron unos loteos de terrenos que fueron adquiridos por gente trabajadora. Estos terrenos reconocían una hipoteca a la que no se hizo mención en los remates ni en las escrituras públicas, y ahora estas tierras son desocupadas por falta de pago de las hipotecas.

Sr. Soler. — Este es un delito que se llama desmantelamiento de derechos en mi proyecto.

La tendencia es la de imprimirle al código ese giro que yo ya he comentado antes y que parte de creer que el código está mal hecho. Estaría mal hecho porque se llama destrucción de vías de comunicación a la destrucción de caminos y vías férreas y no se lo llama sabotaje. Hay que desterrar la idea de que los hechos son sólo delictivos cuando atentan contra la paz interior o la seguridad del Estado.

Sr. Bravo (C. A.). — Es la idea de que el hombre es un medio con referencia al fin, que es el Estado.

Sr. Soler. — Ha comprendido perfectamente mi pensamiento, señor diputado.

Sr. Bravo (C. A.). — Esa era la teoría de Mussolini.

Sr. Soler. — Yo creo que el código tiene que estructurarse sobre una base completamente distinta. Esos problemas están contemplados en mi proyecto y yo los considero como delito de daño; en caso de que se trate de cosas de interés económico, militar, religioso, etcétera, es daño calificado.

Así, por ejemplo, el daño inferido a un polvorín es mucho más grave que el que se pueda inferir a una casa de comercio. En mi proyecto, un polvorín y un museo público tiene el mismo valor, ambos están en un nivel más alto.

Sr. Presidente (Caro). — Con estos antecedentes que el doctor Soler ha vertido en esta comisión, tenemos la opinión de otro prestigioso penalista para considerar la situación creada por estos decretos leyes que debemos considerar.

Si ningún otro señor diputado desea hacer aclaraciones, declaro levantada esta reunión.

—Es la hora 13 y 40.

ACTA DE LA REUNION DEL 21 DE JULIO DE 1964

—Siendo la hora 11 y 30 dice el

Sr. Presidente (Caro). — Se inicia la reunión.

En primer lugar debo agradecer al profesor Núñez su presencia en el seno de la comisión, para nosotros importantísima, que evidentemente significa un nuevo aporte a la tarea en que estamos empeñados. Sería obvio destacar la personalidad de nuestro invitado; en consecuencia, le cedo el uso de la palabra para que exponga su punto de vista sobre el problema que estamos tratando, y en especial sobre los puntos que consideramos más importantes, que están contenidos en este cuestionario.

Sr. Núñez. — El señor ministro del Interior me hizo el honor de consultarme sobre los siguientes puntos: examen y vigencia actual de la legislación represiva; proceso para su reforma y establecimiento de un régimen adecuado a los principios de la Constitución Nacional.

Creí que mis respuestas deberían tratar puntos generales y no particulares; de todas maneras, salvo la última pregunta, las restantes quedarán contestadas en el curso de mi exposición. En caso de que ello no suceda les agradeceré me soliciten las aclaraciones que consideren convenientes.

Considero que el primer punto, y fundamental estando en plena vigencia la Constitución Nacional después de pasado el período defacto, es el relativo a la adecuación del régimen represivo nacional a la Constitución Nacional. Creí que había tres inconvenientes, en ese momento, para considerar el régimen actuante en el país a través de la legislación dictada por el Congreso y de los decretos leyes durante el período defacto, tenía tres factores contrarios para esa adecuación: 1) Reglas que castigaban las opiniones; 2) El castigo penal por decretos leyes; 3) La destrucción de la unidad legislativa de la represión penal común, es decir, la extracción indevida del Código Penal de materias que solamente debieron ir incluidas en él, y que eran propias de una legislación común y no de leyes especiales del Congreso.

El primer defecto lo encontré como tal porque el castigar las opiniones, como expresión de los propios pensamientos, es esencialmente contrario a la demo-

cracia y a la república. Una democracia es el gobierno del pueblo, pero no el gobierno del pueblo por el gobierno a través de la dirección ideológica. Si el pueblo ha de ser el que gobierna ha de tener pleno y amplio acceso a las fuentes de información, tanto religiosas como económicas y políticas. Debe tener a mano saber cuáles son las cuestiones y los objetivos para gobernar. Esto, se dirá, es una posición teórica. Puede serlo, pero es un principio científico y político. Es inconcebible pensar que el pueblo, a quien se establece esa dirección ideológica mediante el castigo de derecho penal común, pueda tener a mano, siquiera con mediano conocimiento, los problemas que constituyen la acción de gobierno.

Por eso propugno la desaparición del delito de opinión. Tanto en la ley 13.985 como en los decretos leyes dictados por el gobierno defacto se castiga la simple manifestación o enseñanza o, en forma indirecta, la adhesión a ciertas agrupaciones o el uso de ciertos símbolos.

Me parece que tanto se prohíbe la fuente de información cuando el hecho delictivo consiste en enseñar cierta doctrina política o religiosa, como cuando se castiga la representación de signos. Castigar signos que demuestren cierta ideología política o religiosa es, entiendo, castigar la expresión misma de la idea en actos que no son fraudulentos ni violentos. Por ejemplo, la ley 13.569, en su artículo 3º, tratando de rectificar una sana doctrina, con jurisprudencia de la Corte para abajo, estableció o amplió lo relativo a los actos hostiles para los gobiernos extranjeros y sancionó al que publique o difunda, por cualquier medio, manifestaciones que pongan en peligro las relaciones amistosas con países extranjeros. El caso preciso figura en el tomo 184, de la jurisprudencia de la Corte Suprema, relativo a cierto diario de esta capital que había tenido expresiones descomedidas para un ministro peruano. El Ejecutivo luchó porque se impusiese una sanción, y la Corte Suprema confirmó que no puede haber hostilidad cuando los nacionales del país se limitan a ejercer un derecho constitucional: la libertad de prensa sin usar fraude ni violencia. Pero la ley agregó, entonces, otro principio, relativo al que publique o difunda, por cualquier motivo, manifestaciones o doctrinas en detrimento de la soberanía o tendientes a reemplazar la libertad establecida en la Constitución, por un acto de fuerza. Aquí se sancionaba no solamente la comunidad de un individuo con una idea, sino también la enseñanza. La cátedra superior y secundaria ponía en peligro a quien exponía, incluso, una doctrina económica que se creyese no participaba con las doctrinas liberales de la Constitución, a la que no hay por qué darla como doctrina dogmática.

Pero, luego, la expulsión del Partido Comunista de la actividad política trajo otras formas de sanción; trajo el uso de emblemas y de símbolos. Ya no se castigaba por enseñar, sino por simples manifestaciones partidarias de una doctrina.

Considero que esas son formas indebidas de castigar una opinión, y he propugnado su supresión, en defensa de la República, en defensa del saber y de la cultura del pueblo.

Con esto yo no propugno ni pretendo que el Estado permanezca impasible frente a la acción nociva de los totalitarismos, vengan de donde vengan, porque distingo claramente lo que es aprender y enseñar de lo que es manifestación de ideología mediante fraude. Por ejemplo, infiltración fraudulenta en la

enseñanza de doctrinas autoritarias, o lo que es la acción violenta ejecutiva de las ideas.

El fraude y la violencia no sólo van contra la Constitución, sino contra toda regulación del orden; pero éste es un resorte administrativo, no es un resorte penal. Yo les puedo asegurar a ustedes que el Estado no va a quedar desguarnecido porque el Congreso sancione una ley derogatoria, o que saque la duda sobre la vigencia de ese tipo de decretos leyes, porque esas ideas extremistas pueden tener tres tipos de manifestaciones: pueden consistir en la constitución o adhesión a núcleos, por ejemplo, el comunista; pero también es aplicable a todo totalitarismo para realizar una acción política o social violenta. En este caso juega el poder de policía, y sólo juega el derecho penal común cuando se llega a la figura especificada por la ley penal común como delito. Pero puede también ese nucleamiento en una idea de tipo totalitario, entrar como acción política o social fraudulenta, por ejemplo, infiltración en la enseñanza, en los gremios o en los propios partidos políticos, de esas ideas violentas o fraudulentas.

Frente a esa acción, que no tiene por qué ser típicamente delictiva, aparece la acción delictiva de perturbación social incriminada como delito, que no es ya problema alguno porque está sancionada en todas las acciones fraudulentas y violentas que el código castiga.

Por último queda el reconocimiento como partido de una de esas ideologías.

Son tres tipos de tratamiento. El primero obedece a un tratamiento preventivo, es decir, la adhesión a núcleos totalitarios para realizar una acción pública violenta, o acciones fraudulentas de ese tipo. Aquí juega principalmente el poder de policía, y estos medios son la reglamentación de las asociaciones con arreglo al principio de la conveniencia pública. Esa es una actitud discrecional que el legislador verá en cada caso, ya que en última instancia el defensor de las garantías es el Poder Judicial. Pero también se entra aquí la regulación del derecho de reunión según el mismo criterio. Esta es una vieja jurisprudencia de la Corte Suprema.

Quiero señalar de paso algo muy importante, que hace a la preservación de la sociedad argentina. A partir de 1941 se nos viene castigando a nosotros, a los particulares. Todo lo que hacíamos los particulares eran excesos; felizmente las leyes represivas especiales fueron motivo de acción policial, pero no judicial. Hay leyes que se olvidaron totalmente incluso por jueces y por los poderes públicos.

El tercer tipo de contralor es el de los ingresos del personal de la administración, siempre mirando al fraude o a la infiltración fraudulenta. Una cátedra universitaria puede ser, y es, doctrina legítima para explicar incluso la tesis comunista, pero no es cátedra para instigar a la adhesión a ciertos principios destructores de la Constitución y del orden jurídico argentino. Todo lo que no sea fraude o violencia es permitido. Quienes los distinguen son los hechos en su materialización.

Contra el segundo tipo de acción delictiva no hay problema alguno. Cuando la acción de los autoritarismos no se realiza en forma violenta, será del resorte de las autoridades nacionales, cuando se toquen problemas nacionales, o de las provinciales, cuando los mismos correspondan a las provincias.

Por último, el tercer aspecto está fuera de mi posición. Eso corresponde a lo relativo a la reglamentación de los partidos políticos. Solamente puedo permitirme formular una pregunta: ¿es compatible con

la República democrática la existencia de un partido totalitario? Supongamos que tiene objetivos puramente económicos o que tenga objetivos relacionados con el destino de la República. Pero, como he dicho, eso está fuera de mi exposición.

Estos son los puntos básicos expuestos cuando propugné ante el señor ministro la derogación de los decretos represivos.

Veamos la segunda objeción: el castigo por decretos leyes. Pero tengo que hacer una distinción. En el momento que se me hace la consulta sobre si son válidos los decretos leyes, estamos en plena restauración del régimen constitucional. De ninguna manera voy a llevar el planteamiento de este problema a la validez en el período del gobierno defacto. Mi planteamiento es muy sencillo. Hoy rige totalmente la Constitución. Nuestros jueces, que son los que en definitiva deben decidir este conflicto, están obligados por la Constitución; ellos tienen que aplicar la legislación represiva que se adecue a la Constitución. A ellos no hay otra regla represiva válida que la ley formal sancionada por el Congreso en el orden nacional, por las legislaturas en el orden provincial y por los concejos deliberantes en el orden municipal. ¿Cuál es el problema que eso crea? No crea un problema teórico, si el gobierno defacto tiene facultades. Pero eso hay que analizarlo en otro momento. Ahora hay otro problema. El artículo 18 prohíbe a los jueces castigar sin ley previa, y el artículo 75 y siguientes establecen qué es una ley en la República Argentina. Es una regla sancionada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo.

Y bien: ¿qué le va a ocurrir a nuestros jueces? ¿Qué problema se les va a plantear cuando se quiera aplicar un decreto ley? Se les va a plantear el problema de si es una ley penal, y para decir que es una ley penal van a hacer un tipo de analogía prohibido. En el derecho penal están prohibidas dos cosas: una, vulgarmente conocida por todos: no se ha de castigar el hecho que no está en la ley penal porque es semejante a otro que está. Y para esto doy un ejemplo muy común. Apoderarse de electricidad tiene los mismos efectos prácticos y la misma criminalidad que apoderarse de un reloj. Pero, para algunos, hay una pequeña diferencia: la electricidad no es una cosa. Lo que no debe hacerse es reconocerse que el caso no está en la ley y aplicar la ley porque las consecuencias son semejantes. Eso no está en juego aquí, pero sí lo está otra cosa: está en juego lo que se llama analogía jurídica, es decir, no encontrar la semejanza del hecho que se quiere castigar con el descrito por la ley, sino tener en cuenta otro tipo de semejanza. Y permítanme una referencia para aclarar.

Cuando el tercer Reich se encuentra con un código penal al que no puede modificar por oposición de los juristas del Tribunal Supremo, buscó otra forma, no tocó el código de 1870, pero dejó a la par de la ley sancionada por el organismo autorizado, la que surgía del sano sentimiento popular.

Esa analogía de la fuente vigente con otra fuente jurídica, el sano sentimiento popular sirvió como base de fuente no legal aprobada, de fuente social y jurídica aprobada.

¿Qué nos ocurriría a nosotros? Nuestros jueces tendrían que decir que por razones científicas, de convicción o de utilidad, debe equipararse a una ley del Congreso un decreto ley, pero materialmente las cosas son diferentes. Una cosa es lo que ustedes, como representantes del pueblo sancionan, y otra muy distinta es lo que sanciona un hombre desde un ce-

náculo por razones de necesidad ante la falencia de los poderes públicos constitucionales.

El derecho es una norma de conciencia. Si el derecho no se mueve por principios es —permítanme ustedes decirlo— una porquería. La ley es una cosa muerta. La ley vive a través de quienes la aplican, pero no se puede admitir esto: en la jurisprudencia de la Corte Suprema posterior a 1955 se fija la facultad del jefe de Policía para dictar edictos. En este país se discutió siempre esa facultad del jefe de Policía para dictar edictos represivos. La vieja Corte Suprema dijo que sí, que podía hacerlo. En épocas anteriores a 1955, se dictó un edicto policial; se lo trajo al juzgamiento del tribunal superior, y la Corte sancionó un principio, por el que yo había luchado durante mucho tiempo, contrario a esos poderes del jefe de Policía. En un fallo comparable a los de los tomos 178 y 191, donde se indicaron claramente las garantías constitucionales, la Corte dijo que era imposible admitir en materia represiva un decreto ley. Pero luego ocurrió una tragedia: a ese decreto ley el Poder Ejecutivo defacto lo aprobó diciendo que tenía facultades legislativas. Y la Corte lo aceptó, razonando de la siguiente manera: si el Poder Ejecutivo defacto dice que él tiene facultades legislativas, nosotros lo aceptamos. ¿Vean qué principio científico y de moralidad política! Es realmente abrumador, y más tarde, ya en materia penal, la Corte dijo que si se podía dictar una ley también se podía dictar una ley penal. Que lo que privaba era la oportunidad; pero hay que comprender que el derecho penal no es norma de oportunidad, sino de tranquilidad para los ciudadanos. de seguridad en la defensa de los bienes.

En nuestro artículo 18 el *nullum crimen sine lege* es una regla de garantía contra la maldad de los hombres, contra las malas intenciones de los hombres.

Por eso no es una ingenuidad, como se ha dicho, lo dispuesto en el artículo 18, sino el conocimiento de lo que somos, egoístas, autoritarios. Es que la ley no puede ser hecha por quien la aplica.

En definitiva, ¿qué van a hacer nuestros jueces? Pueden opinar que los decretos valen. En mi provincia no hay ninguno que haya dicho que valen. Van a hacer una analogía, y si la Corte Suprema es un tribunal de derecho, tendrá que decir que al lado de la fuente positiva, por convicción, por interés o por utilidad, se ha creado otra norma, porque nadie puede decir que un decreto ley es una ley. Y sobre el particular, la Constitución dice que no lo es.

Pero quiero aclarar que el problema de los decretos leyes no es como se plantea por nuestros teóricos: si no se aprueban los decretos, va a quedar un vacío, pues tienen que caducar en el momento en que caduca el gobierno defacto.

El decreto ley ha sido incorporado al *status* jurídico por un procedimiento no objetable. Pero, ¿cuál es la validez de su vigencia? Ese es el problema constitucional.

Yo propuse al señor ministro que se dijese si los decretos leyes rigen o no, porque incluso se puede plantear el problema que contempla cualquiera de las preguntas que figuran en este cuestionario, porque no solamente se puede discutir la validez de esos decretos en su forma positiva como creadores de disposiciones, sino si también valen como derogadores de legislación dictada por el Congreso. Deben los jueces de la época constitucional, reconocer que una ley dictada en época normal, ha sido derogada por un solo hombre. Ese es un problema gravísimo. Por eso contesto a la pregunta número 2 del cuestionario:

«¿Opina que al derogar los decretos leyes y decretos, debe expresarse el restablecimiento de disposiciones derogadas, sustituidas o modificadas por aquellas?» Evidentemente que sí, porque el Parlamento debe tender a la seguridad jurídica. No nos pueden decir que en Buenos Aires valen y en Córdoba no. El derecho no vale sin orden, sin estabilidad. No pueden regirse por la opinión de unos u otros jueces y para eso es necesario decir en forma terminante si valen o no.

La tercera cuestión que me llevó a opinar en forma contraria al criterio imperante, es legal o constitucional o régimen de decretos leyes, no se adecuaba a las formas constitucionales.

La destrucción de la unidad legislativa penal común es otro tema.

A nosotros desde niños nos enseñaron que el artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional cuando otorga al Congreso la facultad de dictar los códigos, le da el manejo de una materia que no es la misma materia que entrega cuando le da la posibilidad de dictar la ley de réditos, o una ley de sanidad nacional o una ley electoral.

¿Eso es pura habladuría? ¿Eso es porque se les ocurrió a los constituyentes de 1853 decir que el Código Civil, el Penal, el de Minería, etcétera; deberían ser dictados por el Congreso? No. Eso se debe a que existe un fondo material, real, en la división de la legislación común y la legislación especial. ¿Es esto real o se ha querido hacer realidad una lucubración de los juristas? No. Yo no estoy defendiendo la idea que hace tiempo defiende: la distinción entre lo que es llevarse por delante una ley de réditos de lo que es llevarse por delante nuestra propiedad. No, pero creo que la confusión de nuestros tribunales ha alterado profundamente el federalismo. Adiós artículo 105 de la Constitución, adiós instituciones provinciales. Esa legislación común se refiere a los intereses que nosotros tenemos como individuos; a los intereses que no nacen de estatutos particulares.

Cuando pensamos que debemos tener nuestras propias cosas, cuando pensamos que debemos comerciar, cuando pensamos que es necesario que se cuide la salud pública, el orden público, la fe pública o la seguridad pública no es porque estemos pensando en intereses que nos ha creado un instituto, sino que estamos pensando en nuestra concepción social, en nuestra organización social. Estamos pensando que un hombre no puede realizarse sin propiedad, sin libertad, sin honor; estamos pensando que cuando nosotros reclamamos en sociedad, necesitamos que alguien diga: «tenga fe y respete estos actos», para que no se contamine, por ejemplo, la fe pública, o no se usen procedimientos contrarios a nuestra tranquilidad y seguridad. Esa es la materia de la legislación común. Es legislación cuya esencia está en los hombres como comunidad, es anterior a todo estatuto particular, y es legislación común. Por eso el Código Penal es una materia intangible, por eso el Código Penal es una materia que no puede ser modificada por los legisladores provinciales a través de leyes de faltas y por eso es que las propias instituciones provinciales, por ejemplo, la reserva del poder local de policía, no puede ser desconocida por el Congreso por una mera ocurrencia. No, señor. El artículo 105 nos ha dado a nosotros, los provincianos, el total y exclusivo manejo de nuestras cosas represivas; nos ha dado el total manejo de nuestra vida de orden común, y nos ha dado el total y

exclusivo gobierno de nuestras contravenciones impositivas y de nuestra seguridad.

El Congreso no puede intervenir sobre eso porque son situaciones creadas por nuestras propias instituciones. Son intereses que nacen de institucionalidades.

Yo he pedido que se incluyan en el Código Penal los delitos contra la voluntad popular. Nadie puede negar que nuestra situación social, institucionalizada por la Constitución, nos ha dado un interés legítimo: el manejo del instrumento de la voluntad popular como medio de gobierno. Eso nadie puede negarlo. Ese es un derecho nuestro, tan sagrado como cualquier otro. Y eso no lo ha creado la ley particular, sino nuestro sistema social político. Son intereses nuestros, que están amparando al hombre, como hombre en la sociedad, desde el punto de vista político.

En 1917 se abandonó la línea seguida desde 1891 hasta 1906, de incluir en el Código Penal esta prueba de la voluntad popular, es decir, la prueba del sufragio como acto de manifestación popular. ¿Y qué pasó? Tuvo malas consecuencias. ¿Cuáles? Se sancionaron las leyes especiales. Con esta cosa espantosa: las provincias, al proteger sus leyes electorales, creaban y reprimían la delincuencia del delito común. El Congreso, por su parte, reprimió cosas que hacen a nuestra existencia de hombres, como es el derecho inalienable que tenemos en la República de manifestar nuestra voluntad. Por eso he propugnado que se incorporen al Código Penal los delitos contra la voluntad popular como manifestación de ese instrumento de gobierno. Y lo he señalado en mi informe tratando de valerme de los precedentes. Estas normas que he propuesto tienen viejos precedentes. Está el proyecto Peco, el proyecto de 1960, y nadie ha criticado el contenido de esas reglas. Por eso no me he preocupado de dar explicaciones exhaustivas.

Hay un decreto vigente del gobierno defacto, el 4.034/57. Voy a leerlo. Habla de derechos electorales.

«Se impondrá prisión de tres meses a dos años al funcionario que no diera trámite al recurso de amparo de electores.» Eso no es el amparo de nuestra expresión de voluntad, sino el amparo de un régimen, de una institución, de una forma de realizar un sistema electoral.

De igual manera, el contenido del artículo 130 no sostiene la defensa libre, espontánea, de manifestaciones del pueblo, sino es un sistema de practicabilidad de la ley electoral.

Finalmente, llegamos al artículo 139, que dice: «Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que mediante violencia o intimidación mandare ejercer un cargo electoral...» Son dos delitos, y esos sí nos atacan a nosotros. Eso es legislación común, y nace de nosotros como hombres de la comunidad. ¿Notan la diferencia real de una cosa y la otra? Nos son atentados a lo que es nuestro, a lo que nos interesa no como nacido de una situación particular, sino como proveniente de nuestra organización política de la sociedad. Los otros viven y mueren cuando desaparece la reglamentación particular. Lo que es local o nacional es el establecimiento de un régimen electoral, y como dado un poder van implícitos los medios para hacerlo efectivo, ésa es la legislación local y nacional pero contravencional, es decir, no va más allá de la ley que la crea, no hiere la seguridad social.

Nosotros como seres humanos, como hombres, no nos manifestamos por medio de nuestros miembros en la sociedad, por medio de nuestros brazos y piernas, sino sólo cuando hieren nuestros derechos. Nosotros vivimos en la sociedad a través de nuestros de-

rechos. Por eso he incluido ese sistema, tomándolo del proyecto de 1960. Sé que es factible de ser mejorado.

Sr. Solari (E. A.). — ¿Cuál es el motivo para doblar la pena?

Sr. Núñez. — Tomé los criterios del proyecto de 1960. No estoy en condiciones de meditar acabadamente estas normas, pero la experiencia dirá la última palabra. Imponer una mayor o menor pena es criterio discrecional que ustedes pueden modificar.

Ustedes como hombres, no como abogados, verán cuál es el grado de criminalidad de cada caso.

Sólo definiendo con calor lo que es constitucional.

Sr. Bravo (C. A.). — Para el caso de que la comisión entendiera que no deben sancionarse en esta emergencia normas que hagan a las cuestiones electorales, es decir, esos aspectos que contemplan los artículos 136 a 139 del proyecto del Poder Ejecutivo, ¿tendríamos que derogar las vigentes y dejar el resto en blanco?

Sr. Núñez. — Evidentemente. Hay que derogar igual.

— Hablan varios señores a la vez.

Sr. Bravo (C. A.). — Quizá no fui claro. Me refería a los artículos 137 a 143 del decreto ley 4.043/57. Esto es ley en la actualidad.

Sr. Núñez. — Va a quedar vigente eso.

Sr. Bravo (C. A.). — Mi pregunta es otra. Ante el caso de que este decreto fuera ratificado por ley — en la comisión existen representantes de muchos bloques y quizá la mayoría sea de opinión de no incorporar al Código Penal los delitos contra la voluntad popular — si igualmente es necesario sancionar estos artículos de la ley electoral, para ajustarnos al criterio que no debe quedar vigente nada que sea sancionado por decretos leyes.

Sr. Núñez. — ¿Esas normas han sido aprobadas en el período de derecho por ley?

Sr. Bravo (C. A.). — Sí, señor.

Sr. Núñez. — ¿Hay decretos leyes derogatorios o confirmatorios? No. No los hay. Entonces, es una legislación que sigue rigiendo. Si hay interferencia de decretos leyes, les queda el problema de la inestabilidad jurídica.

Sr. Presidente (Caro). — Quiero señalarle el criterio de la comisión en un aspecto técnico y formal. Si se considera de buena técnica jurídica derogar, en una misma sanción, todo lo que sea materia de decretos leyes, y a continuación introducir modificaciones al Código Penal. En eso se discrepa. Algunos sostienen que esta sanción debe referirse a la derogación de los decretos leyes, y dejar lo otro para otra oportunidad, ¿cómo sería la reforma del Código Penal?

Sr. Núñez. — Eso no lo puedo contestar, porque juega un criterio político de oportunidad. Pero si se va a considerar la restauración de un derecho penal, no habría por qué dividir, porque es la rectificación de una orientación represiva en el país.

Sr. Presidente (Caro). — Nosotros decimos que técnicamente es inconveniente, porque son dos cosas distintas e independientes. Nosotros creemos que la oportunidad será cuando se haga la reforma del Código Penal.

Sr. Núñez. — ¿Usted me permite que le formule una objeción política? ¿Cuánto va a demorar eso? Porque alguna vez debemos trabajar a fondo.

Sr. Presidente (Caro). — Su pregunta me sugiere otra. ¿No considera usted que dentro del actual ordenamiento del código vigente no están suficientemente protegidos los bienes que ahora se pretende proteger,

es decir, si el artículo 210 no contempla la misma situación jurídica que el 213 bis, en su inciso primero?

Sr. Núñez. — Yo los invitaría a que tomaran toda la legislación sobre asociación ilícita y vieran los subterfugos de que se ha valido la jurisprudencia para encontrar requisitos como éstos: permanencia, establecimiento del plan delictivo, no concreto y determinado, sino si ha habido conversaciones sobre el tipo de delincuencia.

Eso es algo imposible. Pero las diferencias esenciales entre el artículo 210 y el 213 bis, número 1º, surge de que quien haya observado con tranquilidad el desenvolvimiento político de este país tiene que haber advertido que nuestra ciudadanía estaba totalmente perturbada no sólo por conductas públicas tendientes a la instauración de nuevos regímenes de gobierno, sino también por lo que ya ha proliferado — y en Córdoba constituye un peligro grave — y que son los grupos de presión, los grupos Tacuara. A tal punto ha llegado el peligro que yo, en una consulta que me hizo la Legislatura local, me adelanté a sancionar ciertos grupos de violencia. Hace mucho tiempo que los grupos de presión, los grupos Tacuara y las patotas nos quitan la tranquilidad; unos, porque amenazan violencias de trascendencia pública; otras, porque no tenemos vida tranquila en Córdoba pasada la 1 de la mañana.

¿Están esos grupos en las asociaciones ilícitas? ¿Ustedes han visto cómo funciona un juzgado de instrucción para probar la culpabilidad de los patoteros?

Con respecto a las diferencias entre los dos artículos citados tenemos que el 210 exige alguna permanencia, cosa difícil de probar ya que tiene que ser muy tonto el delincuente para dejar huellas de su permanencia en una asociación ilícita. La norma que yo propongo, que no tiene precedentes, admite la permanencia y también la eventualidad, la momentaneidad. Así, es tan delincuente el que fragua con otros un plan para cometer una usurpación como el que actúa en la práctica mediante medios violentos generales, que eventualmente se reúne con un grupo y decide, por acuerdo intencional, poner en práctica inmediatamente la violencia.

Sr. Presidente (Caro). — En todo caso el artículo estaría mal redactado, porque dice: «Artículo 213 bis. — Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años: 1) Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación... Y las violencias sobre las personas están comprendidas en el Código Penal.

Sr. Núñez. — ¿Usted ha visto cómo actúan Tacuara y las patotas?, lesionan, dan empujones. ¿Ha visto cuando se acerca un grupo, sin armas, y ataca a empujones, con insultos, etcétera? Eso no es agresión.

Sr. Presidente (Caro). — Pero está dentro de la violencia.

Sr. Núñez. — De la violencia no delictiva; y mi artículo lleva como objetivo la entrega general a la violencia, no la violencia apresada a través de una figura penal.

Sr. Presidente (Caro). — ¿La violencia de tipo verbal e ideológica?

Sr. Núñez. — En absoluto, señor. Va sólo contra esos grupos de perturbadores que están actuando.

Sr. Presidente (Caro). — Esto está vinculado a lo que expuso el Poder Ejecutivo en su mensaje, que dice: está aceptado.

Sr. Núñez. — Eso obedece a lo que en doctrina jurídica está aceptado.

Sr. Presidente (Caro).—Yo encuentro una contradicción con lo expuesto en su tratado.

Sr. Núñez.—Sí, eso es cierto; pero también lo es lo que sostengo ahora. Ratifico lo dicho, porque no hace la objeción con el 210? ¿Qué diferencia hay entre el 210 y éste?

Sr. Reñé.—Hay que interpretar, entonces, que este nuevo artículo estaría dirigido también a incriminar la violencia del grupo. Usted mencionaba la imposibilidad de determinar, la mayoría de las veces, la participación de cada agente en un hecho delictivo. Este artículo permitiría la discriminación común de todos los participantes.

Sr. Núñez.—Por el solo hecho de la integración del grupo. Cuando se determina la participación, se involucra su complicidad criminal. La criminalidad nace del hecho de golpear, pero aquí nace del hecho de haber formado un grupo de violencia. Cuando la ley dice que se castiga por el solo hecho de formar parte del grupo, está señalando que también es delito organizarse en grupos tendientes a la asociación violenta.

Sr. Bilbao.—Una pregunta vinculada en el inciso 2º del artículo 213 bis, relativa al proyecto del Poder Ejecutivo, que dice: «Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases.»

Entiendo que esta última palabra «de clases», podría traer aparejada la creencia de que vamos a restablecer el derecho de opinión en el sentido de que vamos a combatir la lucha de clases, reconociendo un hecho social de núcleos económicos que se disputan la preeminencia de una sociedad organizada. Convendría aclarar el sentido que nos ha llevado a algunos legisladores a suprimir esta palabra y dejar ese inciso de esta manera: «Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial o religiosa.»

Sr. Núñez.—Explicando esto, he sostenido que a partir de 1930 se viene estructurando, en ciertos círculos del país, una forma muy clara y dañina de perjudicar el espíritu de igualdad, respeto y confianza recíproca, tan necesario para preservar el espíritu democrático y para la tranquilidad de los individuos. La instigación pública a la separación peyorativa de ciertas razas no es delito de opinión, sino separación de ciertos grupos religiosos, sociales, grupos particulares individualizados por su constitución, por sus funciones o por sus ideas.

Por ejemplo, oligarcas, patrones, estudiantes, militares, sacerdotes, capitalistas. La lucha contra ello es un factor muy decisivo para llegar a la destrucción de la unidad social y, sobre todo, predispone a la violencia general preparando el clima para ello. Nadie se puede sentir tranquilo en un país donde esto es lícito.

La discriminación no se mueve aquí en el campo de la lucha económica entre capital y trabajo, donde sí sería perfectamente lícita. Esto no es ideología o castigo de creencias, aunque hay acciones que obedecen a malas creencias, y que son delictivas, y hay acciones delictivas que obedecen a buenas creencias. Aquí lo punible no es que se crea eso; lo punible es que se exprese públicamente que una determinada clase —sacerdotes, militares, etcétera— no puede estar en el juego armónico de la sociedad, porque eso sería defender la doctrina nazi: si usted es judío no puede entrar en esta universidad; si es negro no pueden entrar en determinadas salas de entretenimiento, es decir, se va a la separación peyorativa.

En el código actual es punible la instigación pública a delinquir, a separar o decir que un determinado grupo no puede entrar en la armonía social, pero eso no es, repito, ideología.

Sr. Reñé.—Yo creo notar una laguna de orden textual. El punto 2º del artículo 213 bis dice: «Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clase», pero, ¿y los que la realizan? Fijese usted que puede darse el caso de que el dueño de un local prohíba la entrada en el mismo de judíos, pero eso no es instigación sino realización.

Sr. Núñez.—Eso no es delincuencia contra el orden público.

Expresamente hice la salvedad que no quería reformas totales del Código Penal, únicamente he tocado los hechos que alteran la tranquilidad pública.

Sr. Presidente (Caro).—Aquí se incrimina, por ejemplo, a un orador socialista que incita al proletariado a luchar contra la burguesía.

Sr. Núñez.—No, señor, porque eso sería lucha económica. Todo lo que sea lucha política o económica es lícito.

Sr. Bilbao.—Aquí hay una disposición que reprime la deshonestidad de los funcionarios —artículo 268, 4º—. ¿No traería como consecuencia la inversión del principio del derecho penal de que la responsabilidad jamás se presume?

Sr. Núñez.—Permítame decirle que no. Y ésta no es cuestión de derecho procesal. Se delinque haciendo y se delinque no haciendo. Estamos hartos de que en el país no podamos probar los hechos concretos que fundamentan hechos notorios de enriquecimiento. Entonces, es lícito que a un funcionario público se le ponga un deber, y si no lo cumple, se lo castigue. ¿Cómo voy a probar la coima del funcionario si él tenía el poder en sus manos cuando se enriqueció? Entonces, hay ciertos deberes; hay deberes de probidad.

Sr. Reñé.—¿Hay algún antecedente extranjero con respecto a esta norma?

Sr. Núñez.—No sé. Soy totalmente franco. Me he criado meditando las cosas nuestras. Los antecedentes extranjeros puedo conocerlos, pero éste es un hecho nuestro y para ello nosotros debemos hacer nuestro derecho.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

No soy erudito en derecho extranjero, apenas conozco el nuestro.

Sr. Avila.—Voy a poner un ejemplo práctico respecto al inciso 1) del artículo 213 bis: se me invita al grupo Tacuara, a formar parte de esa asociación. En un momento de debilidad mental acepto. Antes que ese grupo realice algún hecho punible resuelto desistir, es decir, hago uso del derecho de desistimiento. ¿Estaría yo incriminado?

Sr. Núñez.—Cuando el delito está consumado es tal cual es.

Sr. Avila.—¿Antes de que el grupo realice algún hecho punible?

Sr. Núñez.—La delincuencia no se estructura sobre un hecho punible concreto, sino en la formación y tendencia del grupo, que es una cosa real.

¿Que hay dificultades de prueba? Lo mismo que en el caso de la asociación ilícita. El delito se consuma cuando el juez prueba que hubo un estado de agrupación tendiente a provocar hechos violentos.

Sr. Avila.—¿Se me privaría de la posibilidad de desistimiento; por eso el inciso 1) del artículo 213 bis dice en su parte final «por el solo hecho de su

participación? «Tomar parte» quiere decir estar en algo, indica permanencia, mientras que la participación, participar, puede ser momentánea. La delincuencia está en la estructuración del cuerpo con objetivos violentos.

Sr. Reñé.—Cabe otra alternativa posible: suponemos que se constituye una asociación con fines lícitos; después, por la evolución de la mentalidad de sus dirigentes, entra en el plano inclinado de las actividades ilegítimas. ¿En qué momento se consumaría el delito?

Sr. Núñez.—Cuando se han dado las condiciones de que se ha llegado, a través de esa evolución lenta, a constituir un objetivo claro de violencia.

La persona que entra en este tipo de organización inocentemente no será castigada, no hay responsable sin culpa. Pero en este caso concreto la tarea del juez es muy sutil.

Sr. Presidente (Caro).—En épocas de profundas conmociones como la que estamos viviendo, los jueces pierden la objetividad algunas veces en la aplicación de las leyes. Por ello, hay que ser prácticos y hacer que la norma sea lo más precisa posible para no permitir el arbitrio del juez.

Sr. Núñez.—Indudablemente lo que plantea el diputado Reñé es una figura difícil, pero las hay tantas en el Código Penal!

Sr. Presidente (Caro).—Y se iría contra el cabecilla de esa organización.

Sr. Núñez.—Sí, porque de lo contrario, ¿cómo prueba usted el hecho concreto de la participación?

Todas las críticas que se le pueden hacer a mi fórmula también se le pueden hacer al artículo 210. Pero jamás sacaría eso. Porque a mí nadie puede negarme que lo que alarma es la constitución de grupos predispuestos para la violencia. Los casos concretos son alarmantes. Cuando se constituye un grupo tendiente a la violencia y, luego, delinquir. Pero nunca se les va a dar el caso de que mi norma juegue con un delito.

Sr. Solari (E. A.).—Quisiera consultarlo con respecto al inciso 3º del artículo 213 bis del proyecto del Poder Ejecutivo. Ahí se menciona a «los que pública o privadamente instigaren a los militares...». ¿Cuál es su opinión?

Sr. Núñez.—Yo me ajusto a la realidad. Pocos golpean públicamente en un cuartel. Hay que tomar las cosas en su realidad.

Sr. Presidente (Caro).—Me voy a referir al proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre los partidos políticos. Y me refiero a la primera parte de su exposición. El inciso b) del artículo 3º dice: «Doctrina política que en la determinación de la política nacional promueva el bien público...». Es decir, que un partido que propugnara cualquier reforma sustancial de la Constitución estaría al margen de la actividad civil. Pongamos por ejemplo que yo creo que ha fallado el federalismo y que hay que volver al régimen unitario.

Sr. Núñez.—Yo he dado una norma. He hablado claramente de acción fraudulenta o violenta. Cuando las cosas se hacen sin violencia o sin falta, son lícitas Pero yo no doy opinión sobre eso.

Sr. Bravo (C. A.).—Con referencia al artículo 213, inciso 3º, recién consultado por el diputado Solari, ese párrafo nos plantea algunos interrogantes, porque mucha gente entiende que los deberes de la disciplina militar están contemplados dentro del reglamento militar.

Sr. Núñez.—Ese es un principio que debe practicarse. Los ejércitos son fuerzas de orden, pero no

hay orden sin formas, sin disciplina. Los ejércitos lo serán en tanto se desenvuelvan dentro de las reglas de disciplina y respeto hacia las cosas objetivas que ellos no deben interpretar. Todo lo que se haga en contra de las fuerzas de seguridad para sacarlas de ese cauce ideológico es transformarlas en fuerzas proclives al desorden.

Cuando sabemos que la estructura íntima de un ejército —respeto a las leyes, a las jerarquías, etcétera— falla, cuando el mundo del ejército comienza a formarse en una situación política de interpretación y discrepancia, ya tememos porque la función de un ejército es de orden, pero dentro de la disciplina. Lo contrario es violar los códigos de honor, sus propios estatutos y el mismo espíritu militar, y eso nosotros, los argentinos, lo sabemos bien por experiencia.

En todo esto la disciplina no es más que la relación ordenatoria.

Sr. Presidente (Caro).—Por ejemplo, contraer matrimonio sin autorización del superior jerárquico.

Sr. Núñez.—Efectivamente, eso demuestra la violación de un deber e indica falta de espíritu de disciplina.

Sr. Solari (E. A.).—Eso lo castiga el superior.

Sr. Núñez.—En este caso concreto la actividad delictiva común se vuelve delito militar, pero la rebelión es un delito común.

Volviendo al tema de mi exposición, quiero rectificar al señor ministro del Interior. Ustedes observarán que en mi proyecto del artículo 213 bis yo decía «se deben castigar con prisión de un mes a tres años...», y en el del Poder Ejecutivo se dice «serán reprimidos con prisión de uno a cinco años...». Advertirán que hay mucha más criminalidad en el proyecto del Poder Ejecutivo. Personalmente considero que debe mantenerse la pena de un mes a tres años.

En cuanto a la preservación del orden público, proponía un cuarto inciso, que decía: «A los que públicamente instigaren a la desobediencia colectiva de las Constituciones, leyes, reglamentos, decretos o resoluciones de las autoridades públicas.» Parece que ésta es una cosa muy amplia que llevará a un titubeo tremendo. Pero yo lo había justificado de esta manera. El Código Penal —artículo 230— establece: «Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años: 1º) Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y petitionaren a nombre de éste (artículo 22 de la Constitución Nacional). 2º) Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código.»

Por ejemplo, en una intervención a Córdoba, todo Carlos Paz se levantó contra esa intervención. Pero el artículo 213, inciso 4º, se refiere al no acatamiento en general.

Sr. Bravo (C. A.).—¿Usted cree conveniente la inclusión en el proyecto de los delitos electorales?

Sr. Núñez.—Sí. Hay que ponerlos, aunque hay cosas que nunca se practican.

Por ejemplo, el castigo del adulterio Yo no soy un mojigato ni un partidario acérrimo de la religión católica, pero si el adulterio está mal, debemos proteger a la familia, y el Estado no puede levantar los brazos y decir que es lícito. Yo no creo ya tanto en la redención cívica del pueblo, pero, ¿lo van a dejar sin sanción?

de su ratificación, lo serán con efecto retroactivo al día en que se publicaron en el Boletín Oficial.

Art. 3º—Quedan derogados inmediatamente los siguientes decretos leyes: 7.165, del 24 de julio de 1962; 8.161, del 13 de agosto de 1962; 788, del 30 de enero de 1963; 1.296, del 15 de febrero de 1963; 2.713, del 10 de abril de 1963; 4.046, del 17 de mayo de 1963; 4.200, del 23 de mayo de 1963; 4.214, del 24 de mayo de 1963, y 5.540, del 5 de julio de 1963.

Art. 4º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ricardo F. Molinas.

Señor presidente:

No considero lo relacionado con un decreto ley sobre amnistía, porque espero que al tener entrada este proyecto en la Honorable Cámara estará ya dictado y cumplido. Lo digo a pesar de tan encontradas opiniones sobre su oportunidad, para antes o después de las sentencias a pronunciarse por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un proceso inconstitucional, por el carácter de los actuales tribunales militares, sus alternativas, renunciadas de un general y dos almirantes en razón de un decreto que hacía referencia al cambio de la situación procesal de algunos jefes y la prevención de seguir de cerca y con preocupación la marcha de los juicios. Hubo hasta la declaración en Córdoba de un comandante en jefe, de que «frente a la benignidad de ese tribunal se originarían reacciones y sorpresas», y reuniones de jefes y oficiales para seguir también de cerca la marcha de las causas. Y, finalmente, conferencias entre el presidente de la República, el ministro de Defensa Nacional, secretarios militares, el presidente del Consejo Supremo, el auditor general de las fuerzas armadas y otros altos jefes, que, según el comunicado de la Presidencia de la República, habían tratado el proceso que actualmente se ventila por los sucesos del 2 de abril último.

Seguimos, pues, con tribunales especiales y la justicia militar como atribución de comando.

La espera de los fallos no condice con la tradición ininterrumpida de nuestras leyes y decretos de olvido, que se inicia el 30 de septiembre de 1811. La grandeza de la medida quedará menguada. Somos hijos de la revolución, y los golpes y contragolpes sufridos, que han dado gobiernos de fuerza, no tienen otro título para autocalificarse que el éxito o el infortunio; de ahí el olvido; después la paz y concordia, que la hubo siempre.

Pero lo que nunca debe mezclarse con esos pronunciamientos, la aplicación del plan Conintes y los actos conexos con ellos, son los delitos comunes. No se pueden mezclar casos y hechos que son inconfundibles. No sería posible un mayor agravio.

De ahí que algunas iniciativas lanzadas para ampliar la amnistía, aunque en forma encubierta, para los grandes escándalos administrativos de estos últimos años —que han conmovido la conciencia honrada de la ciudadanía—, no sólo echarían por tierra todo el esfuerzo hecho para que alguna vez se apliquen las normas que penan el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, sino que la moral administrativa caería por los suelos. Esto valdría tanto como suspender por algunos años la vigencia del Código Penal, y se repetiría entre nosotros que el hurto no es afrenta y al que lo castigan, es por pobre.

Pero, eso sí, deben derogarse de inmediato los decretos leyes, enunciados en el proyecto, sobre el estado de sitio, propaganda del régimen depuesto por la revolución de 1955, de seguridad del Estado, restricciones a los partidos políticos para la concurrencia a elecciones, inhabilitaciones, prohibición y disolución del Partido Comunista. Con ello, se completarían los enunciados del proyecto sobre creación del fuero militar en la justicia federal para tiempo de paz.

Esperamos, sí, las iniciativas del nuevo gobierno sobre nulidad de los contratos de petróleo; no nos queremos adelantar a sus reiteradas promesas antes y después de la campaña electoral. Nuestra lucha contra los mismos empieza con la California y ha continuado cada vez con mayor decisión bajo el anterior período presidencial.

Lo mismo diremos de la entrega de la energía eléctrica a monopolios extranjeros. Nos igualarán en las severas condenas, pero decimos, sin jactancia, que en las mismas no hemos sido superados.

Nos limitamos, pues, por ahora, a los decretos leyes dictados recientemente, sin desconocer precedentes históricos; entendemos que lo que corresponde es que el Congreso examine todos y cada uno de ellos, girando los mismos a las comisiones respectivas de las Cámaras para su dictamen y consejo.

Dejamos expresa constancia que aquellos que establecen cargas fiscales, si se ratifican, lo sean con efecto retroactivo. Ya sabemos que la Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes sólo en materia penal, y cuando ella agrave la situación del reo. En materia fiscal cabe la retroactividad, y es ésta la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema y la de los Estados Unidos.

Es, además, conocido que en Inglaterra el gravamen se cobra desde que la iniciativa llega al Parlamento. Nadie debe aprovechar esos interregnos, y si la carga no se sanciona, se devuelve al contribuyente lo abonado.

Ricardo F. Molinas.

—A la Comisión de Asuntos Constitucionales.